

EL SOCIALISTA

Pablo Iglesias, fundador



EN EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACION
Y A INSTANCIA DEL GRUPO SOCIALISTA

EL PARLAMENTO APRUEBA LA REASIGNACION DE UN MAYOR GASTO SOCIAL

Durante los días 14 y 15 de febrero se celebró el debate sobre el Estado de la Nación, el sexto desde que en 1983 el Gobierno socialista iniciara esta práctica parlamentaria. El Parlamento aprobó once de las cuarenta y nueve resoluciones presentadas por los grupos parlamentarios. La moción del Grupo Socialista, que recoge básicamente la oferta planteada por el presidente del Gobierno el pasado 21 de diciembre, insta al ejecutivo a que compense, a través de los presupuestos de 1989, a funcionarios y pensionistas que hayan perdido poder adquisitivo en 1988, a que amplíe la cobertura de desempleo para los parados de larga duración, especialmente los mayores de cuarenta y cinco años, y a que equipare en esta legislatura la pensión mínima al salario mínimo.

El Gobierno también se ha comprometido a enviar al Parlamento los proyectos legislativos, con los que se regulará el derecho a la huelga, se

creará el Consejo Económico y Social y se reformará el reglamento del Congreso.

Además, se procederá a la elaboración de los estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla. Gran parte del debate giró en torno a las negociaciones del Gobierno con los sindicatos; en este sentido, Felipe González insistió en la necesidad de alcanzar el consenso no sólo como fórmula para lograr la paz social, sino también para mantener un crecimiento económico sostenido, que permita la creación de empleo.

Por otra parte, mientras que los representantes del CDS, Adolfo Suárez, y de IU, Nicolás Sartorius, coincidieron en solicitar la convocatoria de elecciones anticipadas, los portavoces del resto de los grupos parlamentarios hicieron una llamada al consenso y al diálogo como fórmula para solucionar los problemas.

Págs. 2 a 4

TEXTO INTEGRO DE LA INTERVENCION DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Págs. 5 a 12



SOCIALISMO SIN TRABAJADORES, NO

■ El secretario de Organización, José María Benegas, hace un análisis en un artículo que en este número publica EL SOCIALISTA, sobre la decisión del Partido Socialista Obrero Español de reforzar su militancia social en el mundo del trabajo. «El mayor componente de afiliación del PSOE —dice José María Benegas— lo integran trabajadores. Queremos mejorar los cauces de comunicación orgánica que nos permitan informarnos directamente de la política del Gobierno y de los proyectos socialistas. Conocer sus preocupaciones y sus problemas. Ampliar nuestra presencia en el mundo del trabajo y nuestra afiliación. Discutir y reflexionar conjuntamente. En definitiva, mejorar nuestra organización para defender un proyecto socialista entre los trabajadores.»

Pág. 13



FERNANDO MORAN

CABEZA DE LISTA AL PARLAMENTO EUROPEO

■ En la reunión del pasado día 7 de febrero, La Comisión Ejecutiva Federal adoptó la decisión de que el cabeza de lista del Partido Socialista Obrero Español, en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, sea Fernando Morán. La CEF ha considerado que Fernando Morán, que ya fue cabeza de lista en las elecciones de 1987, es la persona más idónea para llevar adelante esta responsabilidad por su trayectoria política, por su experiencia en temas internacionales y por su participación activa, a lo largo de los últimos años, en temas decisivos que afectan a la construcción de Europa.

Actualmente, Fernando Morán, aparte de su trabajo como eurodiputado, es uno de los diez vicepresidentes con que cuenta el Grupo Socialista del Parlamento Europeo, así como el presidente y portavoz de la delegación española en el Grupo Socialista.

Doce horas fueron necesarias para que en el Congreso se desarrollase el debate sobre el estado de la nación, el sexto que tiene lugar desde que en 1983 iniciara esta práctica parlamentaria el Gobierno socialista. A pesar de la petición de urgente convocatoria de elecciones que hicieron los portavoces del CDS e Izquierda Unida, Adolfo Suárez y Nicolás Sartorius, respectivamente, el debate sirvió para demostrar, como afirmaría el presidente del Gobierno, Felipe González, que la concertación y el consenso son las únicas formas de conseguir la paz social. Y el objetivo no es otro que el de lograr un crecimiento económico que permita un reparto solidario de los beneficios y la atención de las demandas sociales.

Paz social, crecimiento y redistribución de la



Con un menor esfuerzo fiscal no puede atenderse el nivel de servicios que demanda la sociedad

UNA LLAMADA AL CONSENSO

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, portavoz del Grupo Popular, en su intervención expresó la necesidad de realizar un esfuerzo de consenso por parte de todas las fuerzas políticas para solucionar los problemas que tiene planteados la sociedad española.

«La situación del país —dijo Herrero— puede y debe arreglarse desde las Cortes y el Gobierno debe plantear ante el Congreso un gran paquete de medidas relativas a la reordenación del gasto, la reorganización de la fiscalidad para fomentar la inversión, la creación de empleo, el restablecimiento del diálogo social y la protección de los colectivos realmente desvalidos.»

Según el diagnóstico del portavoz del Grupo Popular, la gran economía va bien, pero los objetivos de lucha contra la inflación, corrección de desequilibrios, competitividad y crecimiento, pueden correr peligro por la elevada presión fiscal y el volumen del gasto público.

Herrero calificó de «desdichada» la negociación entre el Gobierno y los sindicatos, a los que acusó de «abandonar la vía de la concertación, con lo que están dando un salto atrás de muchas décadas».

El portavoz del Grupo Popular también consideró útil el establecimiento de un Consejo Económico y Social «que sirva para desdramatizar y hacer fluido el diálogo entre los interlocutores sociales», así como la promulgación de una Ley de Huelga.

Apertura al diálogo

La invitación al consenso que hizo el portavoz del Grupo Popular fue aceptada por el presidente del Gobierno, Felipe González. Asimismo, en su réplica a la intervención de Herrero, el presidente se mostró dispuesto a la elaboración de una Ley de Huelga y a la creación del Consejo Económico y Social, ya que, dijo, «no sólo estamos dispuestos sino deseosos de crear ese instrumento que permita y fuerce a las partes a mantener un clima de diálogo».

Dijo, sin embargo, que aunque el consenso político es importante, no es posible sin la presencia de los representantes sindicales y empresariales.

Felipe González admitió que era posible que el Gobierno no hubiera seguido un buen método para alcanzar la concertación, aunque el ejecutivo se ha esforzado siempre en conseguir el acuerdo. Negó que haya una disminución de la renta salarial y aseguró que el mal funcionamiento de los servicios públicos se produce ya que existe una mayor velocidad de crecimiento económico que de infraestructuras.

Admitió que la presión fiscal ha aumentado a un ritmo mayor que en otros países comunitarios, «pero partíamos de una base de inexistencia de la presión fiscal y aún estamos por debajo de la influencia impositiva de la media europea». Por otra parte, Felipe González afirmó que con un menor esfuerzo fiscal no puede atenderse el nivel de servicios que demanda la sociedad.

NO A LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES

La intención final de la intervención del presidente del CDS, Adolfo Suárez, que se expresó en un tono especialmente desabrido, fue la de pedir la convocatoria de elecciones. Para ello, llegó a afirmar que el proyecto del Gobierno socialista «está agotado».

El representante del CDS inició su alocución afirmando que el país vive un momento político «enrarecido y confuso», ya que la huelga del 14-D, afirmó, ha conducido a un «callejón de difícil salida».

El bloqueo de la vida política e institucional, la inestabilidad social, la tasa del paro y la subida de la inflación son, a juicio del presidente del CDS, algunas de las deficiencias de la actual situación.

Las críticas de Suárez se dirigieron también a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y su menor participación en la renta nacional y al descenso de la cobertura del desempleo. Y en un ataque directo al Gobierno, acusó a éste de abuso de la mayoría, prepotencia e «incapacidad para cumplir sus compromisos».

El desalentador panorama descrito por el político centrista se completaría, según su exposición, con el deterioro de la Administración de justicia y lo que llamó «fracaso» de las reformas educativa y sanitaria.

Réplica del presidente

Las críticas de Adolfo Suárez fueron contestadas por el presidente del Gobierno, Felipe González, quien rechazó las acusaciones de prepotencia y recordó al líder centrista algunas de las medidas de carácter unilateral que adoptó el Gobierno de UCD tras el fracaso de las negociaciones con los sindicatos.

Sin embargo, Felipe González aseguró que el Gobierno socialista no se atrevería, en ningún caso, como consecuencia del fracaso de una concertación, a publicar un decreto sobre fijación de la evolución de los salarios, «como ocurrió en diciembre de 1978 con el Gobierno de UCD».

El presidente del Gobierno, por otra parte, admitió en su réplica lo difícil de la situación actual, aunque recordó que la mayor conflictividad social en el país había coincidido, precisamente, con los gobiernos centristas, que presidió Suárez.

González también demostró la disposición del Gobierno a ser controlado por el Parlamento, en contra de lo afirmado por el político centrista. Además, Felipe González recordó que ha sido el primer presidente de la democracia en dialogar con los sindicatos y, aunque reconoció que posiblemente se hubieran dado una cierta falta de habilidad para negociar, subrayó que «no se puede negar al Gobierno el esfuerzo que ha hecho para intentar un acuerdo».

Rechazó las afirmaciones de Suárez sobre una supuesta regresión social, insistiendo en el hecho de que la media de creación de empleo en nuestro país es superior a la de los países europeos. Y rebatió el que estén deteriorándose los servicios públicos al recordar los importantes proyectos de reforma que se han puesto en marcha en ámbitos como el educativo y el sanitario.

Por último, el presidente afirmó que nunca su Gobierno ha mostrado una actitud antisindical. «Al contrario —indicó—, se han aprobado leyes para potenciar el papel de los sindicatos y se han asignado importantes partidas para su fortalecimiento patrimonial.»



La mayor conflictividad social en el país coincidió con los gobiernos centristas, presididos por Suárez

Entorno económico y riqueza, claves para un debate



Fotos: M. Otero



En política autonómica se ha avanzado con el establecimiento de un modelo definitivo de financiación

PRIORIDADES DEL GASTO PÚBLICO

El portavoz de Minoría Catalana, Miguel Roca, defendió la tesis de que, aunque «el proyecto político del Gobierno presenta señales de manifiesto agotamiento», los problemas «no se resuelven dimitiendo o convocando elecciones».

El político catalán consideró que falta en España un auténtico debate político sobre las prioridades del gasto público.

En relación con el fracaso de la concertación, Roca aseguró que éste no debe dramatizarse. Aunque señaló que, en su opinión, ahora debe hacerse más énfasis en el diálogo con todas las fuerzas políticas «y el Gobierno debe conducir su acción buscando la colaboración del Parlamento, como expresión de la soberanía popular».

Aunque se mostró convencido de que «han sido importantes las razones que el Gobierno ha invocado para no aceptar determinadas peticiones sindicales», el portavoz de Minoría Catalana propuso la búsqueda de un proyecto que consiga «ilusionar y motivar de nuevo a la sociedad».

En este sentido, el político catalán pidió al Gobierno que asumiera una política económica con una «mayor sensibilidad social».

Así, Miguel Roca consideró necesario que el Gobierno cumpla con la oferta hecha a los sindicatos, consistente en el aumento en dos puntos de la revisión para 1989 y la ampliación de la cobertura de desempleo a los parados de larga duración.

Por último, el portavoz de Minoría Catalana lamentó la ausencia en la comunicación inicial del presidente del Gobierno de alguna alusión al tema autonómico. Criticó duramente la política llevada a cabo por el ejecutivo en

este capítulo, ya que, afirmó, se están invadiendo los campos competenciales de las autonomías y se están recuperando «los peores hábitos del centralismo».

Voluntad por la concertación

En su respuesta a Miguel Roca, el presidente del Gobierno se mostró de acuerdo con la realización de un debate político sobre las prioridades del gasto público. «Siempre que —dijo— los objetivos prioritarios de la sociedad sean compatibles con el crecimiento económico, la creación del empleo, la contención de la inflación y la reducción del déficit.»

Aunque admitió el papel de consenso que el Parlamento juega, Felipe González insistió en la necesidad de encontrar un modelo de concertación con los agentes sociales. «Hoy —afirmó— en la circunstancia presente haría la misma propuesta programática, con la misma voluntad de encontrar como instrumento la concertación, pero sin resignarme a no conseguir los objetivos si ésta falla.»

El presidente reconoció que no se había abordado en su discurso la política autonómica y se mostró partidario de realizar un debate sobre esta cuestión en el Senado. No obstante, aseguró que en esta materia se han dado «pasos importantes» como el restablecimiento de un modelo definitivo de financiación. Finalmente, Felipe González, aceptando las razones aducidas por Roca para no adelantar las elecciones, afirmó que el Gobierno tiene que gobernar y «éste ha gobernado, con errores y con aciertos, gobierna y gobernará».

EDUARDO MARTÍN TOVAL

EL PROGRAMA SOCIALISTA, LA MEJOR GARANTÍA DE PROGRESO

La intervención del representante del Grupo Socialista, Eduardo Martín Toval, en el debate sobre el estado de la nación, como la del resto de los portavoces, giró en una buena parte sobre el fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y los sindicatos.

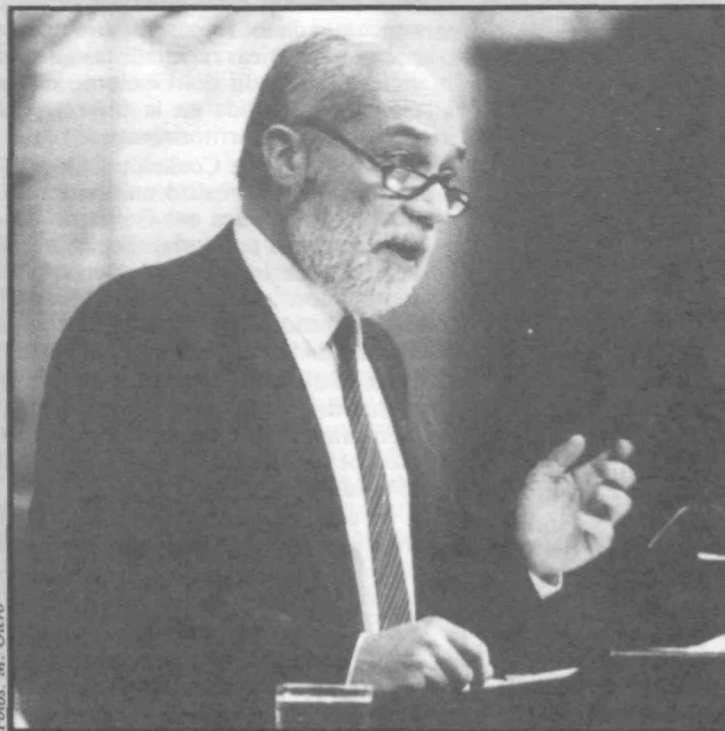
Aun reconociendo la importancia de no haberse alcanzado un acuerdo, «por el que —dijo— hemos trabajado y al que seguimos abiertos», Martín Toval manifestó que no debe transformarse en catástrofe este desacuerdo y que la realidad del país no puede condicionarse exclusivamente a la carencia de un pacto social. «Por ello —añadió—, el Gobierno debe seguir gobernando, cumpliendo escrupulosamente su programa, que sigue siendo la mejor garantía de progreso para este país.»

El portavoz del Grupo Socialista había iniciado su intervención calificando como «normales» las demandas sociales que se están produciendo una vez superada la fase de recuperación económica.

Según afirmó Martín Toval, la atención de estas demandas ha orientado la gestión del Gobierno desde 1982, ya que la economía para el Partido Socialista no es otra cosa que un instrumento de solidaridad y de progreso social. Así, el Estado se ha esforzado en mejorar las pensiones, en reformar la sanidad y la educación públicas y en modernizar las infraestructuras.

«De esta forma, el gasto social ha crecido desde el 82, reduciéndose las desigualdades sociales en el país aunque éstas siguen siendo una preocupación para los socialistas», afirmó Martín Toval.

El portavoz del Grupo Socialista señaló que así se demuestra que el Gobierno está cumpliendo su programa electoral y que alcanzar el resto de los objetivos sociales pasa por lograr el mantenimiento del crecimiento económico.



Fotos: M. Otero

Foto: M. Otero



En la segunda sesión del debate intervinieron los portavoces del Grupo Mixto.

DIALOGO PARA SUPERAR LAS DESIGUALDADES

La recuperación del diálogo como fórmula de solución de los problemas y de superación de las desigualdades territoriales fueron dos de los ejes sobre los que giró el debate sobre el Estado de la Nación en su segunda sesión.

Concretamente, para el representante del PNV, Iñaki Anasagasti, el diálogo debe ser el instrumento no sólo para encauzar la actual situación social del país, sino también para lograr una mayor conexión entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas.

Anasagasti pidió una política de búsqueda de soluciones, una vía para encontrar un instrumento de comunicación permanente entre el Gobierno y los sindicatos, refiriéndose a la necesaria creación del Consejo Económico y Social, cuya ausencia, según el portavoz del PNV, ha provocado la actual situación de confusión.

Como los portavoces de otros grupos Anasagasti abogó por un mayor protagonismo para el Parlamento. «Hay que rehabilitar lo político y situarlo en su lugar, para que el debate sea de todos», afirmó.

Sartorius, por las elecciones anticipadas

La intervención del portavoz de Izquierda Unida, Nicolás Sartorius, estuvo dirigida a pedir al Gobierno la urgente convocatoria de elecciones generales, como solución para frenar la actual situación de conflictividad social. Aunque, añadió, esto podría evitarse «si el Gobierno diera a los sindicatos lo que éstos han pedido en las negociaciones».

En su repaso a la situación social del país, Nicolás Sartorius habló de incumplimiento de promesas electorales del Gobierno, de mal funcionamiento de los servicios públicos y de desmoralización de la vida pública y política.

Interpretando la ruptura de la concertación con los sindicatos, Sartorius calificó de «regateo» la actitud del Gobierno, al que acusó de practicar una política antisindical, aunque reconoció que el ejecutivo debía de gozar de autonomía respecto a las centrales sindicales.

Bandrés: felicitaciones y reproches

El análisis que realizó Juan María Bandrés, de Euskadiko Ezkerra —pri-

mero de los ponentes del Grupo Mixto en intervenir en el debate—, mereció de éste lo que él mismo calificó de «felicitaciones y reproches».

Los elogios del representante de EE recayeron en cuestiones como el crecimiento económico y el impulso que desde la presidencia de la CEE hará el Gobierno español en relación con la política de paz y de respeto a los derechos humanos.

También felicitó al Gobierno por las conversaciones con Argelia, «dentro de los límites democráticos y el acuerdo de los partidos».

Las críticas de Bandrés se dirigieron a la Ley de Objeción de Conciencia y al fracaso de la concertación social.

Por lo que se refiere a esta última cuestión, Bandrés defendió la actitud mantenida por los sindicatos y pidió al Gobierno la rectificación de su política.

Corrección de desigualdades

En el debate sobre el estado de la nación pudieron oírse también las intervenciones de los representantes de agrupaciones políticas regionalistas que coincidieron en pedir del Gobierno una acción más decidida en la corrección de desigualdades territoriales.

El portavoz de Coalición Galega, Senén Bernárdez, realizó una crítica de la política económica del Gobierno desde la perspectiva territorial. Según Bernárdez, aunque los resultados económicos son buenos, hay que potenciar la política de solución de desigualdades entre las Comunidades Autónomas.

En nombre del Partido Aragonés Regionalista, Isafas Zarazaga sacó a colación también las cuestiones regionales, para pedir del Gobierno un impulso del Estado de las Autonomías.

El conflicto que el Gobierno canario mantiene con la Administración central al negarse el primero al desarme arancelario impuesto por la mecánica de la CEE, fue abordado, lógicamente, por el representante de la Agrupación Independiente Canaria, Luis Mardones.

El diputado canario rechazó el que la solución del problema pueda venir por la vía judicial.

Mardones abogó por el entendimien-

to entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, en la misma línea en que más tarde se pronunciaría el representante de Unión Valenciana, Miguel Ramón Izquierdo.

El último de los ponentes del Grupo Mixto en intervenir fue el portavoz de Eusko Alkartasuna, Joseba Azcárraga, que abogó por una profundización del proceso autonómico con la ampliación de competencias.

En relación con la situación política del País Vasco, Azcárraga ofreció al Gobierno el respaldo de su partido para conseguir el fin del terrorismo y la pacificación de la región.

Prioridades

El presidente del Gobierno, Felipe González, en su intervención en el segundo día de debate, reiteró su disposición a lograr una concertación con todos los agentes sociales, rechazando que la responsabilidad del desacuerdo recaiga exclusivamente en el ejecutivo.

En respuesta al portavoz de Izquierda Unida, el presidente negó que su Gobierno haya realizado en ningún momento una política antisindical, y pidió que se haga un balance desde el punto de vista legal, económico y de infraestructuras. Felipe González rechazó también que el Gobierno haya sustituido la pedagogía de la libertad por la del autoritarismo, lo que había insinuado Nicolás Sartorius.

Además, González acusó al PCE de haber decidido su estrategia desde el pasado verano, con la convocatoria de una huelga general y la petición de dimisión del Gobierno.

En relación con las afirmaciones de los portavoces que habían apuntado a la existencia de desigualdades regionales, el presidente aseguró que los recursos económicos de la Administración son limitados, y hay que actuar en función de prioridades.

Sobre el conflicto entre el Gobierno central y el canario, Felipe González mostró su disposición al acuerdo, aunque «mientras tanto, no se puede dejar de cumplir la ley».

Igualmente, defendió el cumplimiento de las leyes, rechazando los reproches que Juan Bandrés había realizado sobre la norma reguladora de la objeción de conciencia.

Mociones aprobadas

El debate sobre el Estado de la Nación concluyó con la votación de las mociones de resolución presentadas por los distintos grupos parlamentarios. El Congreso aprobó, por mayoría absoluta, un total de once propuestas de resolución de las cuarenta y nueve presentadas. El Grupo Socialista votó a favor de cinco del Grupo de Coalición Popular, tres del PNV, una de Minoría Catalana y una de Coalición Galega, además de la del PSOE.

La propuesta socialista consta de tres apartados y recoge básicamente la oferta planteada por el presidente del Gobierno el pasado 21 de diciembre. La moción socialista insta al Gobierno a que remita a la Cámara para su discusión y aprobación el conjunto de medidas que, reasignando los recursos presupuestarios, permita hacer frente a tres objetivos:

— Compensar a quienes perciben retribuciones o pensiones del Estado a través de los presupuestos y que hayan perdido poder adquisitivo a causa de la desviación de la inflación prevista en 1988, en términos tales que el efecto de la compensación para los pensionistas quede consolidado para el ejercicio de 1989 y siguientes.

— Ampliar la cobertura por desempleo a los colectivos de parados de larga duración, con consideración especial para los mayores de cuarenta y cinco años y para los que tienen cargas familiares.

— Equiparar durante esta legislatura la pensión mínima al salario mínimo.

Las cinco propuestas de resolución del Grupo de Coalición Popular se refieren a: la presentación de un proyecto de ley regulador de la huelga; la exclusiva competencia del Gobierno en las conversaciones que mantiene con ETA; el envío a la Cámara del proyecto de ley de creación y regulación del Consejo Económico y Social; la reforma del reglamento del Congreso y la remisión a las Cortes de los proyectos de Ley de Estatutos de autonomía de Ceuta y Melilla.

En cuanto a la propuesta de Minoría Catalana, el Congreso insta al Gobierno para que, con redistribución de las partidas presupuestarias pertinentes, proceda al incremento hasta 20.000 pesetas al mes de las pensiones asistenciales y de la LISMI, así como la reducción de la edad de percepción de las mismas a sesenta y seis años.

De las tres mociones del PNV, la primera se refiere al consejo de RTVE, a fin de que ayude a generar una dinámica de paz, y a poner un mayor énfasis en las noticias de tipo institucional relacionadas con la violencia y el terrorismo; la segunda insta al Gobierno a que reitere su condena total al terrorismo, organizado y ejecutado por grupos o Estados, y la tercera solicita al Gobierno que durante la presidencia de la CEE se articulen los mecanismos que permitan la resolución de los problemas actualmente planteados a las CC.AA. por el ingreso en la Comunidad.

Por último, el Pleno aprobó una propuesta presentada por Coalición Galega, en la que se establece que el Gobierno informará puntualmente a la Xunta de Galicia de todos los proyectos que se desarrollan en la región transfronteriza Galicia-Norte de Portugal.



Foto: M. Otero

Durante los días 14 y 15 de febrero el Congreso de los Diputados fue el escenario del sexto debate sobre el estado de la nación, iniciativa adoptada por el Gobierno socialista desde 1983. En estas páginas EL SOCIALISTA ofrece a sus lectores el texto íntegro de la intervención del presidente del Gobierno ante la Cámara, intervención que estructuró en cinco apartados: la situación económico-social, la concertación social y sus dificultades, perspectiva de las Comunidades Europeas, política de paz y seguridad y terrorismo.

EL ESTADO DE LA NACIÓN

INTERVENCION DE FELIPE GONZALEZ

Señor presidente, señorías:

NICIAMOS hoy el sexto debate sobre política general, de acuerdo con la iniciativa adoptada por este Gobierno desde el comienzo de su primer mandato. Voy a centrar mi atención en cinco temas, sin excluir a lo largo del debate otros que puedan surgir. Los cinco serán: situación económico social, la concertación social y sus dificultades, perspectiva de las Comunidades Europeas, política de paz y seguridad y terrorismo.

Como saben bien, todo debate de política general que pretende analizar la evolución, año a año, del estado de la nación tropieza con dos dificultades. La primera es que la enumeración de los temas produce insatisfacciones relativas a los diferentes interlocutores.

De esta manera, cada año se oye desde la tribuna que no han sido expuestos por el Gobierno una serie de problemas que legítimamente considera de importancia para la representación que ostenta. Una vez más, pido excusas por anticipado por ello.

Salvo que consideremos el debate como una especie de trunca opositora, es lógico y razonable que nos situemos en las grandes cuestiones que marcan las orientaciones básicas de la situación social o de la situación nacional.

El segundo problema es la presencia de lo inmediato o noticable como un elemento que se convierte en clave para el debate. En esta ocasión es, además, un

acontecimiento de gran transcendencia: el desacuerdo entre el Gobierno y los sindicatos en la negociación sobre cuatro de los cinco puntos reivindicativos que estos sindicatos dedujeron de la huelga del 14 de diciembre del pasado año.

Así pues, consciente de ambos riesgos, trataré de explicar las posiciones del Gobierno ante la evolución de 1988 y ante las perspectivas para el futuro inmediato.

La experiencia política nos va enseñando a ver con mayor naturalidad la existencia de diferentes enfoques sobre una misma realidad, sin que falte una parte de verdad en las distintas versiones que encarnan estos enfoques. Por ello, desde la responsabilidad del Gobierno, aunque se haga un esfuerzo de máxima objetividad, seguramente estaremos condicionados por nuestras circunstancias y, dispuesto como estoy a decir la verdad de lo que pienso, de antemano admito que han de ser tomadas mis apreciaciones con el relativismo propio de los que las perciben desde otras posiciones distintas.

Cada día me parece más importante que seamos capaces de lanzar ante la sociedad española un debate político clarificador de posturas y objetivos y cada vez, por el contrario, me parece menos útil mantener una confrontación basada en descalificaciones que niegan toda la razón al adversario, cualquiera que sea éste.

De este Gobierno se dice que su única finalidad es permanecer en el poder y, por consiguiente, que todo lo que hace va encaminado a conseguir este objetivo. Al mismo tiempo, se afirma que el Gobierno

no es sensible a las reivindicaciones de la base social que lo apoya o a las reivindicaciones de los sindicatos. Si lo primero fuera verdad, no aceptar las reivindicaciones de los sindicatos sería algo peor que un error, sería una estupidez en contradicción directa con el supuesto deseo de permanecer en el poder a toda costa. Por tanto, los ciudadanos podrán comprender que si el Gobierno mantiene determinadas posiciones que se consideran poco populares o a las que se atribuyen las consecuencias de una pérdida de apoyo electoral será, acertada o equivocadamente, porque cree en un proyecto político, económico y social para nuestro país que debe desarrollarse dentro de unos límites en los que no caben sesiones demagógicas o actitudes meramente electoralistas. Si ello tuviera consecuencias negativas desde el punto de vista electoral, cosa que lógicamente trataremos de evitar, en todo caso sería preferible a la laxitud o al abandono de objetivos que nos parecen importantes para todos como sociedad, pero en particular nos parecen importantes para los sectores menos favorecidos.

He aquí la gran contradicción en la que aparentemente estamos viviendo como fruto de una situación confusa o, tal vez, como fruto de nuestra falta de capacidad para explicar claramente por dónde queremos caminar.

Es lógico, señorías, que, dicho esto, se instruya la posibilidad de un paquete de medidas espectaculares sobre el que se rumorea que se va a presentar a lo largo de este debate.

SITUACION ECONOMICO SOCIAL

La separación en diferentes puntos temáticos a efectos de exposición —reiteraré una vez más— tiene que ir siempre acompañada de la explicación de que unos y otros se relacionan entre sí. Son, como saben muy bien, interdependientes, como lo son cada vez más las evoluciones internas de nuestra sociedad y las de las sociedades de nuestro entorno.

Véase, por ejemplo, la relación íntima que existe entre la situación socio-económica de España, la necesidad de una concertación social que permita alcanzar los objetivos en un clima de paz social y el proceso de integración en la Comunidad Europea, al que se une el desarrollo del Acta Única.

El año 1988 ha sido el tercero consecutivo en el que la economía española ha mostrado unos signos claros de recuperación. Como saben, tras una larga década de crisis y después de tres años de política de ajustes, a partir de la mitad de 1985, el crecimiento se ha situado en una media que supera el 4,5 por 100. Sin duda hemos aprovechado el efecto de una mejor coyuntura internacional junto al esfuerzo de saneamiento realizado dentro y por la sociedad española.

Los datos son suficientemente conocidos para detenernos mucho en ellos, sobre todo si tenemos en cuenta que, junto a los factores positivos, hay también otros negativos, factores de riesgo, a los que merece la pena prestar atención para evitar que se conviertan en siniestros.

Siguen siendo demasiado importantes los desafíos de la economía española en los próximos años para que no permitamos cualquier ejercicio de autocomplacencia.

Por tanto, parece poco discutible que la política de ajuste y la coyuntura internacional han producido los efectos positivos necesarios para permitir que los últimos tres años hayan sido de crecimiento sostenido de nuestra economía, a un ritmo, como saben bien, superior a la media comunitaria y a la de los países de la OCDE.

La recuperación del denostado excedente empresarial y la confianza en la situación española han dado como fruto un crecimiento importante de la tasa de inversión que se viene situando en torno al 14 o el 15 por 100. Como la confianza es un concepto relativamente etéreo y frágil, seguramente a ella ha contribuido la disminución de la tasa de inflación en los últimos años, la recuperación de un equilibrio razonable de nuestras cuentas con el exterior y la estabilidad política interna e internacional de España.

Creación de empleo

Estos elementos, que despectivamente se consideran macroeconómicos o macro-políticos y respecto de los que una y otra vez se reitera que no afectan a la vida de los ciudadanos, han producido una primera consecuencia que, a nuestro juicio, es la más importante de todo el cuadro: se ha pasado de la destrucción de empleo neto durante diez años a la creación de empleo neto en los últimos tres años y medio.

A efectos de orientación, deberíamos recordar que en esos diez años de referencia, 1975-1985, se destruyeron en nuestro país más de dos millones de puestos de trabajo, y conviene no olvidarlo: en todo o en parte se destruyeron las empresas que los sostenían. A partir de esa fecha y hasta el momento en que celebramos este debate, se han creado un millón doscientos mil puestos de trabajo neto. En los últimos

tres años se han reconstruido en torno a la mitad de los puestos de trabajo destruidos en la época de crisis. Como esto es insuficiente para las necesidades de la sociedad española, sería ridículo sacar de ello conclusiones de autosatisfacción, pero también sería insensato no deducir de este cuadro una conclusión igualmente inexorable: es necesario hacer todo lo posible para mantener una evolución económico-social que permita, que siga permitiendo para el próximo y siguientes años, una evolución semejante en términos de creación de empleo.

Si es verdad lo que se dice en todos los discursos, en todas las prédicas que a diario oímos, sea quien sea quien los pronuncie; si es verdad, digo, que la prioridad número uno para todos nosotros (fuerzas políticas, económicas y sociales) es la generación de empleo, aplicar recetas que contradigan las condiciones básicas para conseguir este objetivo es un error que no se puede admitir. Sean cuales sean las críticas que esto conlleve, en la medida que el Gobierno pueda evitarlo, lo evitará.

● Si es verdad que la prioridad número uno para nosotros (fuerzas políticas, económicas y sociales) es la generación de empleo, aplicar recetas que contradigan las condiciones básicas para conseguir este objetivo es un error que no se puede admitir.

Partiendo, pues, de la base de que necesitamos mantener el crecimiento de nuestra economía en tasas que se aproximen a lo que ha venido ocurriendo en 1986, 1987 y 1988, porque ello nos va a permitir seguir creando empleo, ¿qué deberíamos hacer y qué deberíamos evitar? No hace falta ser un especialista, como ahora se dice, un tecnócrata, para comprender que si la política de ajustes ha de ser concebida como una política rigurosa y vigilante, la política de crecimiento sostenido no plantea menos exigencias de rigor, de vigilancia, más bien al contrario. Creo que en la situación económico-social de España, tendríamos que redoblar nuestro esfuerzo, el esfuerzo de todos, para que no se nos fueran de las manos las oportunidades que, sin duda, se están ofreciendo a la sociedad española por actitudes laxas o por falsos espejismos. Por ejemplo, sería imperdonable que no fuésemos capaces de frenar la amenaza inflacionista que todavía pende sobre la economía española, con sus efectos altamente negativos para las rentas de los más desfavorecidos, para

el mantenimiento de una competitividad imprescindible y para el sostenimiento, en fin, de una política de creación de empleo. Sería absurdo que no tuviéramos en cuenta que nuestra balanza comercial ha cambiado de signo justamente al compás de nuestro crecimiento económico y que ello nos ha llevado a una situación de balanza de pagos negativa cuyo control ha de mantenerse en unos límites soportables. Si el desequilibrio de la balanza comercial siguiera aumentando y su impacto sobre la balanza de pagos sobrepasara determinados límites, nos veríamos obligados a estabilizar de nuevo, sobre todo si se pierde el control de la inflación.

Integración en la Comunidad

Este cuadro se ve con mucha mayor nitidez si se tiene en cuenta otro de los elementos que con frecuencia se menosprecian en nuestro debate interno: el desarrollo de nuestra adhesión a la Comunidad Europea y la dinámica producida por el Acta Única Europea. Aunque volveré más tarde a los temas comunitarios, cuando analizamos la situación económico-social de España, podemos ver que, coincidiendo con nuestro ingreso en la Comunidad —enero de 1986—, la economía española ha vivido su mayor etapa de crecimiento en los últimos años. Pero, al mismo tiempo, podemos ver que nuestra competitividad no es suficiente para aguantar unos intercambios comerciales que nos resultan desfavorables, aunque sea cierto que una parte de las importaciones van encaminadas a mejorar nuestro aparato productivo y, por tanto, a compensar ese desequilibrio en la competitividad. Y, finalmente, podemos ver cómo se pone de manifiesto, en este proceso de integración en la Comunidad, que nuestras tasas de inflación no pueden separarse de las tasas medias comunitarias sin grave riesgo para la economía española. Hemos entrado en la Comunidad en un momento en que ésta está viviendo una nueva dinámica de crecimiento, de liberalización, de modernización, de incremento de su capacidad de competitividad. Para España, sin duda, como para el conjunto de la Comunidad, esto es positivo, pero representa un desafío mayor. Si el tren comunitario hubiera caminado, en el momento de nuestra integración, a marcha lenta, un ligero incremento de nuestra velocidad para adaptarnos nos hubiera facilitado el ponernos a su ritmo y, por tanto, montar en él. Pero ese tren comunitario está marchando a buen ritmo y, por ello, nuestro esfuerzo para no quedar en la vía tiene que ser mayor. Pero lo importante es que este esfuerzo es muy positivo para la economía y para la sociedad española. No debe ser, por tanto, concebido como un sufrimiento sino como una oportunidad para despegar definitivamente de nuestro pasado.

Esto es, fundamentalmente, el mensaje que uno trataría de transmitir a los agentes económicos y sociales y a las fuerzas po-

líticas. Conscientes de que no es una tarea exclusiva del Gobierno, conscientes de que no basta una determinada definición de política económica para conseguir resultados, conscientes, en fin, de que el esfuerzo positivo, el decrecimiento sostenido, eliminando las incertidumbres y aprovechando los márgenes diferenciales que tenemos, exigen un acuerdo muy amplio. De otra manera, la tarea se hará mucho más difícil.

Prioridades

Y en este cuadro, el Gobierno ha propuesto, a través del instrumento que tiene en la mano, una serie de prioridades que se expresan con toda claridad en los presupuestos generales para 1989, los presupuestos que deben acompañar razonablemente la marcha de la economía del país para ayudarla a conseguir sus objetivos. Poner hoy el énfasis en un mayor gasto para desarrollar nuestras escasas infraestructuras materiales y humanas no es más que manifestar la voluntad de facilitar los cauces adecuados para un crecimiento sostenido. Reiterar, contra corriente, que la moderación en el crecimiento de las rentas salariales es un factor importante, aunque no único, para mantener controlada la inflación y aumentar nuestra competitividad, no es más que contribuir a un crecimiento sostenido capaz de generar empleo en una economía más moderna.

Aumentar el gasto social dentro de unos límites tolerables que permitan disminuir nuestro déficit y que permitan también mirar al futuro sin la angustia de una crisis financiera de nuestro sistema de Seguridad Social, no es más que intentar una distribución de la riqueza que no suponga un engaño demagógico, capaz de superar un bache, pero no de subir toda la cuesta.

Si se me permite la expresión, tener sensibilidad social (algo distinto a sensibilidad corporativa) significa, a nuestro juicio, mantener estos objetivos para España.

Es verdad, señorías, que la política económica obligará siempre, en cualquier circunstancia, a una selección de prioridades y éstas pueden considerarse relativas, aunque sea desde el punto de vista cuantitativo. Por ello, es posible que algunos piensen que aumentar más de lo que se hace el gasto social no perjudicará el crecimiento sostenido de la inversión y el empleo, o el proceso de adaptación a la economía europea.

Es posible que alguna razón tengan los que afirman un año que estamos obsesionados por la inflación y al año siguiente dicen que la peor derrota de la política económica, la que genera una gran deuda social, es que la inflación media se sitúa en el 5 por 100, despreciando un crecimiento de más del 5 por 100 y una creación de empleos netos superior a 300.000 puestos de trabajo.

Y es posible que tengan razón los que dicen que nos preocupamos excesivamente por el déficit del Estado, y los que afirman que ese déficit no es del Estado, sino de la sociedad, sobre todo de la sociedad del futuro, que aunque no lo haya contraído, deberá pagarlo.

Por todo esto, cuando defendemos un determinado análisis de nuestra situación económico-social, y de las exigencias de rigor y de vigilancia que nos plantea su futuro, lo hacemos con la plena conciencia de que es discutible y, por tanto, con la convicción de que otros pondrían el énfasis en cosas distintas de las que el Gobierno pretende.

LA CONCERTACION SOCIAL Y SUS DIFICULTADES

NO niego la razón a los interlocutores sociales de manera total, como ellos hacen con el Gobierno. Más bien trato de buscar, a través de un diálogo serio, un punto de encuentro que haga compatible lo que pensamos que debe hacerse en política económica y social y lo que otros piden que hagamos en algunas materias específicas. Y lo hacemos así porque creemos que merece la pena conseguir un clima de paz social, por su valor en sí mismo para todos los ciudadanos en la convivencia diaria y porque es un instrumento que facilita la consecución de objetivos económico-sociales benéficos para todos.

Ahora bien, esta actitud de búsqueda de un acuerdo tiene unos límites. Límites que, estando en el acierto o en el error, no podemos ni debemos sobrepasar como Gobierno, como responsables primeros de la política económica y social.

Y, como decía al principio, esta actitud en el momento que estamos viviendo se aleja de cualquier planteamiento electoralista; soy plenamente consciente de ello. Porque una posición electoralista nos llevaría a *Asumir* —con mayúscula—, como piden las centrales sindicales y alguna fuerza política, sus posiciones y reivindicaciones, sea cual sea su impacto sobre la economía y sus efectos sobre las posibilidades de futuro. Cuánto más cómodo sería para el Gobierno esta comparecencia ofreciendo a la Cámara y a los ciudadanos un acuerdo con las centrales sindicales en todo lo que exigen.

Por ello, conviene recordar lo que ha venido ocurriendo, para aclarar en lo posible el punto en que nos encontramos. Los dirigentes sindicales y otros afirman que el Gobierno ha roto por mucho tiempo las posibilidades de concertación social. Junto a esto, se hacen descalificaciones sistemáticas al Gobierno y a su política económica y social. Como no se trata de jugar a fáciles descalificaciones, voy a intentar describir los acontecimientos y explicar las posiciones del Gobierno.

En primer lugar, la concertación ha sido considerada importante, como concepto y como instrumento, durante todo el proceso de transición democrática, tanto para la consolidación de las libertades, cuanto para la superación de la crisis económica. Y, vista de esta manera, se inició con un acuerdo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria y con la ausencia de los sindicatos y de la patronal. Fue esta primera concertación «sui generis», conocida como «pactos de la Moncloa» y situada en aquellos primeros meses de nuestra experiencia democrática, urgida por la necesidad de conjurar las amenazas a las libertades y de combatir los más graves desajustes de la economía. Fue importante, entre otras cosas, para reducir diez puntos de una inflación que era galopante por aquellos años. La clave estuvo en el acuerdo de negociar salarios, retribuciones, por la inflación prevista y no por la pasada. Pasamos del 26 por 100, aproximadamente, al 16 por 100 de inflación en muy poco tiempo, aunque después ésta quedara estancada hasta 1983 en torno al 15 por 100. Pero, a partir de ese momento, que lógicamente no habría de repetirse porque los sindicatos y la patronal empezaron a jugar su papel, la concertación empezó a entenderse, en sus dimensiones clásicas, como un acuerdo entre sindicatos y patronal —eran los acuerdos-marco o los acuerdos interconfederales—, que orientaban el conjunto de la negociación colectiva, y como acuerdos

entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos cuando habían de incluir aspectos de política económica y social que vinculaban también al Gobierno: promoción de empleo, evolución de pensiones, formas de contratación, cobertura de situaciones de necesidad, etcétera.

En algo más de una década ha habido dos acuerdos entre Gobierno, sindicatos y patronal: el firmado por el Gobierno de UCD, en 1981, con eficacia hasta final de 1982, y el firmado por el Gobierno socialista en 1984, con eficacia para 1985 y 1986. Hubo, además, en los años 1980 y 1983, acuerdos entre la patronal y los sindicatos. Pero en los años 1987 y 1988 no han sido posibles los acuerdos tripartitos; tampoco lo han sido los acuerdos entre sindicatos y patronal. Y es necesario preguntarse por qué, para saber qué perspectivas de futuro tiene la concertación tal como se había venido practicando en España.

A mi juicio, este tipo de concertación global, que ayuda a obtener objetivos económico-sociales aceptables para todos, se ha hecho imposible desde que la dirección de UGT decidió que ese modelo se había agotado, según sus propias palabras. Y digo que desde que UGT tomó esa postura, porque en el caso de Comisiones Obreras, después de la firma del Acuerdo Nacional por el Empleo, con el Gobierno presidido por Calvo Sotelo en el año 1981, sólo aceptó el acuerdo interconfederal en 1983, a comienzos de 1983, y rechazó en todo momento la firma de cualquier acuerdo global con el Gobierno socialista.

Cambio de estrategia

En nuestra etapa de Gobierno, por consiguiente, sólo la UGT ha estado dispuesta a negociar acuerdos tripartitos, y ello ha ocurrido hasta 1987, en que cambió de estrategia y decidió no volver a negociar acuerdos globales de ningún tipo.

El Gobierno, por el contrario, ha seguido creyendo de suma importancia el mantenimiento de una política de concertación y así se constataba en el programa electoral del Partido Socialista. Antes dije que una política rigurosa y con claros apoyos no sólo es necesaria cuando se trata de luchar contra la crisis, sino que lo es, asimismo, cuando se trata de garantizar un crecimiento sostenido con unos equilibrios razonables. Pero esto, tras el período 85 y 86, cubierto por el Acuerdo Económico y Social, no ha sido posible.

El Gobierno propuso en 1987 un acuerdo a tres años a los sindicatos y a la patronal, con la vista puesta en los desafíos de nuestra integración en Europa y en el cumplimiento del Acta Unica Europea. De las reuniones mantenidas en la primavera y en el verano de 1987 con los interlocutores sociales, se conoce el rechazo total de los sindicatos a cualquier tipo de ne-

gociación global, rechazo que se vuelve a repetir en 1988. Pero, aún hoy, cuando el Gobierno pretende llegar a acuerdos, aunque sean parciales, en materias como la promoción de empleo para jóvenes y otros sectores con dificultad para incorporarse al mercado de trabajo, las centrales sindicales siguen rechazando la posibilidad de negociar con el Gobierno y la patronal, argumentando que nada tienen que discutir con los empresarios, es decir, los empleadores, sobre política de empleo. Por eso, públicamente he dicho que a partir de 1987 la negativa de los sindicatos a cualquier forma de concertación tripartita que pudiera ayudarnos a conseguir objetivos económicos y sociales para el conjunto de la sociedad ha liquidado este modelo y nos ha introducido en una dinámica nueva, a mi juicio de confrontación, cuya solución debo confesarles que veo con extrema dificultad.

● Aún hoy, cuando el Gobierno pretende llegar a acuerdos, aunque sean parciales, en materias como la promoción de empleo para jóvenes y otros sectores con dificultad para incorporarse al mundo del trabajo, las centrales sindicales siguen rechazando la posibilidad de negociar con el Gobierno y la patronal.

Siempre se va a seguir argumentando que el Gobierno es el responsable de que no haya acuerdos en tal o en cual materia concreta y que cuando se produce un acuerdo, por ejemplo en educación o en correos, es gracias al esfuerzo que han hecho los sindicatos. Pero lo cierto es que los sindicatos no quieren la concertación global que nos permita enmarcar acuerdos parciales en un cuadro razonable de objetivos aceptables y aceptados por todos. De esta manera, cuando los dirigentes sindicales rechazaron las propuestas del Gobierno a partir de 1987 —repito— de negociar objetivos, como creación de empleo, política de inversiones, gasto social, infraestructuras y competitividad de la economía española, entre los interlocutores sociales y el Gobierno, nosotros, el Gobierno, aceptó la fórmula de negociar en mesas distintas para cada materia y sin la presencia de la patronal, cual era la petición de los sindicatos en la inmensa mayoría de ellos.

Yo creo que esto es lo que ha conducido al fracaso de la negociación, porque, a pesar del esfuerzo por mantener el diálogo, el método no puede producir resultados satisfactorios. La experiencia de los últimos meses es una clarísima demostra-

ción de lo que digo. Antes de la presentación de los últimos presupuestos, hicimos un nuevo intento de diálogo sobre lo que se han llamado las cuentas del Estado y sobre los objetivos económicos y sociales de la política presupuestaria. De nuevo hubo un rechazo y una negativa total a que hubiera un foro de encuentro entre la patronal, los sindicatos y el Gobierno, o incluso a discutir sobre la globalidad, sobre el conjunto de los ingresos y de los gastos de manera bilateral: sindicatos-Gobierno y Gobierno-patronal. De modo que entramos en la negociación a través de las conocidas mesas solicitadas por los sindicatos, siempre con los mismos interlocutores, pero en mesas totalmente diferentes para cada tema.

Lógicamente, el Gobierno, en la fecha previa al 30 de septiembre, fijó sus prioridades presupuestarias y presentó los Presupuestos Generales porque era su obligación legal.

Corresponsabilidad

Cada vez que se pide en una mesa un aumento de gastos, es lógico que el Gobierno explique que ese gasto debe ser detráido de otra partida, o bien que se deben aumentar los ingresos o bien que va a afectar al déficit. Y más lógico aún es que el Gobierno pretenda que esto se asuma por los negociadores. Pero uno se encuentra con la actitud sistemática por parte de los interlocutores sociales de que les da igual cuánto dinero hay disponible y de dónde se va a sacar el gasto que solicitan. Si esto se repite en cada una de las mesas de negociación, es fácil que comprendan, señorías, que el resultado se hace totalmente imposible. Y a esto se añade un riesgo permanente. Hoy lo volvemos a vivir. Cada vez que el Gobierno, buscando un acuerdo, avanza en sus ofertas, éstas se consideran ya comprometidas, aunque no se llegue a firmar nada. ¿Cuál es el resultado? El Gobierno se compromete siempre, cada vez que dice que puede avanzar un metro para buscar un acuerdo. Los interlocutores no se comprometen nunca. Con este razonamiento, para qué habrían de comprometerse. Salvo que se firme en blanco y ellos rellenen lo que deseen encima.

Señorías, mientras más se aproxime el Gobierno a las posiciones de los sindicatos, peor van a presentar el resultado para verse libres del compromiso de firmar y a continuación exigir que se cumpla lo que se ha ofrecido y seguir libres para seguir exigiendo posteriormente.

Pienso, señorías, que los sindicatos, en una sociedad democrática, deben compartir, como los demás interlocutores, una parte del poder democrático acorde con los intereses que defienden y con la representatividad que ostentan. Pero esto tiene que tener la contrapartida de asumir una parte de la responsabilidad, responsabilidad ante las prioridades que deben asumirse, responsabilidad ante los ciudadanos por lo que se pide y por lo que se obtiene, porque todo sale de los mismos ciudadanos. Y esto es lo que creo que está fallando. Hay un grave desequilibrio entre la exigencia de poder y la dejación de responsabilidad que esa exigencia conlleva.

Estas reflexiones nos llevarán a comprender mejor los acontecimientos del último mes. El 21 de diciembre expliqué a la Cámara la posición del Gobierno ante la huelga del 14 y la plataforma de la que

partíamos para llegar a un acuerdo con los sindicatos. El ministro de Trabajo dedicó varias horas de información en la Comisión correspondiente, y yo intentaré hacer un resumen de las posiciones mantenidas y del desacuerdo que se ha producido.

La primera duda que despejamos en la Cámara —creo que con el acuerdo de todos— se refería a la posición de fondo de los sindicatos: ¿Estos querían negociar o querían imponer sus reivindicaciones? Quedó claro, en principio, que la única posición admisible era la de negociar y que no era admisible la imposición. El resultado de las conversaciones muestra que los sindicatos no han dado ningún paso significativo en la negociación y su posición final era la misma que el 15 de diciembre, cuando escribieron al Gobierno para que asumiera —recuerdo la expresión—, sin más, los puntos reivindicados. Pero, además, no tengo más remedio que salir al paso de algunas falsedades que se repiten sin cesar cuando se habla de compromisos adquiridos por el Gobierno, compromisos que debe cumplir. Se pone por escrito que no se trata de una negociación normal, sino una relación entre deudor y acreedor.

Primera aclaración. No hemos tenido ninguna ocasión de contraer compromiso alguno con Comisiones Obreras, porque nunca han querido llegar a un acuerdo con este Gobierno. Por tanto, no sé por qué se dice que hay compromisos contrainformados desde Comisiones Obreras, cuando jamás se han sentado con este Gobierno en la disposición de llegar a un acuerdo. Adquirimos un compromiso con la Unión General de Trabajadores en el Acuerdo Económico y Social en 1984 para los años 1985 y 1986; era el período de vigencia del acuerdo. Esto se cuidan mucho de ocultarlo los interlocutores sindicales. Y aquel compromiso afectaba a un número de personas en el cálculo de cobertura de desempleo que se hizo, y ese número de personas fue cubierto por las medidas de prestación de desempleo en el plazo previsto, 1985 y 1986. Pero cometimos el error de fijarlo en porcentajes, aunque hicimos el cálculo de personas a cubrir y el compromiso terminó en diciembre de 1986.

Adquirimos más tarde con los electores, después de la firma del Acuerdo Económico y Social, un compromiso en nuestro programa electoral y este compromiso, señorías, de política económico-social, fue negociado también con la Unión General de Trabajadores y hoy nos debemos atener a ese compromiso electoral para darle estricto cumplimiento y para preguntar una y otra vez en qué no se está cumpliendo, desde el punto de vista social, el compromiso electoral.

Negociaciones

Veamos, pues, el contenido de la negociación y el punto al que se ha llegado para que puedan juzgar por los datos más que por las declaraciones de principio. El día 21 fijamos las posiciones, como he dicho antes, a efectos de iniciar la negociación, y pocos días después me reuní con los secretarios generales de la dos centrales sindicales más representativas. Intentábamos poner en marcha el proceso. En aquella reunión ya reiteré la explicación que había dado en el Parlamento (debo añadir que con sorpresa de los interlocutores, porque me decían en la reunión que eso era exactamente lo que había dicho al Parlamento, como si pudiera ser algo distinto lo que les decía como punto de partida de la negociación el día 26 de lo que había dicho públicamente en

el Parlamento el día 21 como punto de partida de la negociación), y acordamos dividir esta negociación en dos foros o en dos mesas: una se refería a cobertura del desempleo, recuperación de poder adquisitivo, equiparación de pensión mínima al salario mínimo en la legislatura, según se decía en la nota, y derechos de negociación colectiva de funcionarios, es decir, cuatro puntos, tres de contenido económico; otra, que no se ha reunido aún, sobre promoción de empleo o planes de fomento del empleo o como quieran definirlo.

Es evidente que esta última está íntimamente relacionada con la cobertura de desempleo y lo es también que debe avanzar, como prioridad número uno, en un acuerdo tripartito, que hasta ahora siguen rechazando, como acuerdo de tal naturaleza, las centrales sindicales. Pues bien, las posiciones han evolucionado de la siguiente manera:

■ **Cobertura de desempleo.** Los sindicatos mantienen la misma posición de cobertura de desempleo sobre el 48 por 100, o lo que es lo mismo, traducido a personas en el día de hoy —no sabemos lo que puede ser en el día de mañana—, 587.000 personas más cubiertas.

Dicen que ello está comprometido en el Acuerdo Económico y Social firmado en el año 1984; no dicen, como antes les recordaba, que el período de vigencia era de los años 1985 y 1986, pero tampoco dicen que se negaron a negociar un nuevo acuerdo a partir de 1986, y no dicen que en el programa electoral negociamos con la UGT un mecanismo de cobertura a partir de 1986 que no fijaba porcentaje, porque ellos y nosotros sabíamos que no era posible ni sensato, dada la evolución que estábamos viviendo de la población activa en España. Y, sobre todo, yo sí deseo decir que ahora se puede repetir la misma situación que en noviembre del año pasado, que los sindicatos rechazaron la oferta de cobertura, como lo hacen hoy, y descontaron ya los 60.000 millones de pesetas que se propusieron para este fin de incremento de cobertura.

Parten de la base de que ya había 60.000 millones de pesetas comprometidas, y eso no lo cuentan como esfuerzo presupuestario adicional para 1989. Pero la realidad presupuestaria no es esa. El Gobierno empezó a negociar ofreciendo 60.000 millones de pesetas que no constan en los presupuestos y añadiendo 46.000 millones de pesetas más para atender a unas 300.000 personas. Pero si se dice que esa previsión ya estaba asumida, el Gobierno va a mantener su posición; sobre los presupuestos actuales se sitúa esa oferta.

Si leen con un poco de detenimiento la carta de Comisiones Obreras, dicen que el complemento sobre lo ya comprometido que piden para cobertura de desempleo es de 90.000 millones de pesetas en

● **El compromiso del Gobierno, más allá del compromiso del programa electoral (que dice literalmente: el Gobierno mantendrá el compromiso de la progresiva mejora de aquellas pensiones que se encuentran aún por debajo del SMI), es que equipararemos pensión mínima y salario mínimo en el período de la legislatura.**

el último momento de la negociación. Si ello fuera así, y parlamentariamente no cabe duda de que lo comprometido, como ellos mismos dicen aportando un documento presupuestario, es lo que existe en los presupuestos, el acuerdo se habría cerrado, porque sobre lo que existe en los presupuestos el Gobierno está dispuesto a añadir 106.000 millones de pesetas, no 90.000.

Pero, sobre todo, no se tiene en cuenta por los sindicatos la voluntad del Gobierno de emplear más recursos públicos para promoción de empleo, en particular de los jóvenes, lo que podría llegar, si funcionan los planes de promoción, a superar el porcentaje que los sindicatos pretenden de cobertura, pero llegar por un procedimiento más correcto. No se puede seguir prefiriendo la subvención del desempleo que dividir los recursos y promocionar la incorporación de jóvenes al mercado de trabajo.

En resumen, inicialmente partimos de 60.000 millones para cobertura y finalmente llegamos a ofrecer 106.000 millones, que cubrían a 300.000 personas en una situación que considerábamos, de acuerdo con las estimaciones, de dificultad.

■ **La recuperación del poder adquisitivo en las personas dependientes de la Administración.** El Gobierno ha ofrecido, para simplificar, una cantidad de 128.000 millones de pesetas que se corresponde con dos puntos de incremento en pensiones y salarios para pensionistas y funcionarios, este aumento se produciría en 1989, y la subida de los funcionarios, si hubiera un acuerdo, sería aproximadamente del 7,6 por 100, y la de los pensionistas, del 8,5 por 100.

Las personas afectadas, en lo que se refiere a los pensionistas, podrían ser como unas 5.800.000 personas, en Seguridad Social, y en lo que se refiere a funcionarios y clases pasivas, como un millón y medio de personas, aproximadamente, más.

La oferta inicial del Gobierno era compensar en una sola paga a aquellos colectivos que realmente hubieran perdido el poder adquisitivo como consecuencia de

la inflación del año 1988. El argumento empleado por las centrales sindicales y reiterado en las cartas para definir esta reivindicación, desviación de la previsión de inflación hecha por el Gobierno como una deuda social, es la primera vez que aparece en el panorama español. Nunca antes lo habían hecho, ni con este Gobierno ni con otros.

En todo caso, el Gobierno va a mantener su posición de garantizar que no haya pérdidas de poder adquisitivo en el sector de personas que están bajo su responsabilidad desde el punto de vista retributivo o desde el punto de vista de las pensiones, mientras que la situación económica lo permita. Pero si alguien defiende la tesis de los sindicatos, que es, en definitiva, una cláusula de garantía revisable año a año, debo decir que habríamos desandado en el sector público, y puede que en la economía española, todo el terreno que empezó a conquistarse, por acuerdo entre todas las fuerzas políticas, repito, todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, en el año 1977; es decir, podríamos haber retrocedido once años de un camino que empezó entonces, que yo creo en la dirección correcta.

Pero lo más destacable también en este punto es que los sindicatos no han movido prácticamente su posición y el Gobierno lo ha hecho para llegar a un acuerdo de una manera sustancial.

■ **La equiparación de pensión mínima a salario mínimo.** La oferta del Gobierno contempla un total de 135.000 millones de pesetas, de los cuales, 62.000 millones se emplearían en 1989 y 73.000 millones en 1990. En este caso, las personas afectadas podían sumar, si se repiten con algunos de los afectados en el punto anterior, unos 3.526.000 pensionistas. De ellos, hay una parte que están en pensión mínima y otros que están en el tramo entre pensión mínima y salario mínimo, obviamente. No todos en pensión mínima. Se reparten 1.800.000, 1.700.000.

Este es un compromiso del Gobierno y, por tanto, le darán cumplimiento en el período de la legislatura, aunque lamentablemente también se está faltando a la verdad en las afirmaciones que se hacen.

Foto: M. Otéro



Conclusiones

Conclusiones de este proceso negociador: el Gobierno ha ofrecido un gasto social adicional (digo gasto social no gasto presupuestario adicional para que no haya dudas) de 369.000 millones de pesetas, de los cuales 73.000 corresponden a 1990 —es el segundo tramo de la equiparación pensión mínima-salario mínimo—, y 296.000 al presente ejercicio (296.000 sobre el gasto social previsto en estos presupuestos, que es no sólo el compromiso del Gobierno, sino el compromiso de todo el Parlamento desde el punto de vista del gasto social, puesto que la votación mayoritaria legítima lógicamente el presupuesto, se esté o no de acuerdo con una u otra partida).

Hay una central como Comisiones Obreras que dice: esto no es más —y es lo que más me preocupa, señorías— que el 50 o el 52 por 100 de las cantidades económicas reivindicadas en los tres puntos que tienen contenido económico. Debo confesarles que como nunca hemos podido saber cómo establece Comisiones Obreras la cantidad que reivindica, sólo podemos deducirlo de esta manifestación, que si es verdad para los tres puntos supone un total, aproximadamente, de 730.000 millones de pesetas. Si estamos hablando de 369.000 millones de pesetas de aumento de gasto social, supone un total de 730.000 millones de pesetas, 50 ó 52 por 100, pero si sólo se refirieran al año 1989 sin tener en cuenta que una de sus peticiones es justamente homologación en la legislatura de pensión mínima-salario mínimo, la diferencia sería de casi 300.000 millones de pesetas, porque para este año son 296.000, y si ellos dicen que eso es el 50 ó el 52 por 100 de lo que piden, este año debería de haber 600.000. Esto, señorías, es totalmente distinto, es obvio, a las posiciones que afirman, desde la misma fuente, que la diferencia está en torno a los 100.000 millones de pesetas. Alguien está intentando confundir, y saben, señorías, que hay algo en lo que es fácil clarificar las posiciones y es la cantidad disponible en los presupuestos. Comisiones Obreras aporta exactamente el documento disponible o el documento que fija la cantidad disponible en los presupuestos, poniendo de manifiesto —lo dice literalmente en la carta— que el Gobierno ha aumentado en un 90 por 100, 107.000 millones de pesetas respecto del presupuesto anterior, las atenciones y los subsidios sociales para la cobertura que pretende. Pero como yo no quiero que haya la menor duda de que me interesa que quede claro, esos 107.000 millones, de pesetas que suponen un incremento del 90 por 100 sobre el presupuesto inicial de 1988, no son una nueva cantidad para aumentar la cobertura, son la parte de desviación de cobertura que se ha ido produciendo durante el año 1988; pero si fuera verdad, como pretenden las centrales sindicales, que ya está comprometida presupuestariamente una mayor cantidad para cobertura, razón de más para llegar a un acuerdo sobre la cantidad consignada en los presupuestos.

Estamos ofreciendo 106.000 millones de pesetas sobre la consignada en los presupuestos, que es la única cantidad cierta y en la que podemos no cometer el error de estar traspasando cifras y conceptos de una parte a otra.

Pues bien, a partir de esta situación todo el mundo se pregunta qué se puede hacer, y hay interpretaciones que me parecen delicadas. Por una parte, si los sindicatos reflexionan y aceptan, tenemos que hacer un ejercicio que es ajustar las prioridades presupuestarias, y el Gobierno hará una propuesta de disminución de

gasto en otras partidas. También hará un esfuerzo para reexaminar los ingresos y averiguar, sin que suponga un aumento de la presión fiscal, si hay algún margen para complementar esos ingresos previstos. En ningún caso, quiero advertirlo desde ahora, aceptaremos un incremento del déficit. Pero si los sindicatos no aceptan, el Gobierno va a cumplir sus propuestas del 21 de diciembre, por eso decía antes que no habrá medidas espectaculares, el problema es demasiado serio para jugar de manera electoralista con él, va a cumplir sus propuestas del 21 de diciembre y el esfuerzo de ajuste en el gasto y de alteración de las prioridades presupuestarias será, lógicamente, menor. Es evidente que en ambos casos tendrá que intervenir la Cámara, y ante ella habrá de discutirse ese reajuste.

● El proceso de negociación no ha terminado, puesto que tenemos pendiente el primer punto de la reivindicación y de la negociación —a nuestro juicio, el más importante y creo que a juicio de todos—: la negociación sobre planes de empleo.

Pero no quiero dejar de recordar, antes de acabar con este punto, que el proceso de negociación no ha terminado, puesto que tenemos pendiente el primer punto de la reivindicación y de la negociación —a nuestro juicio, el más importante y creo que a juicio de todos—: la negociación sobre planes de empleo. Y esto, señorías, supondrá una nueva carga para el Estado, o bien porque se incrementará el gasto (depende del modelo que se adopte, nosotros seguimos con nuestros proyectos retirados tal como prometí el día 21 de diciembre, y esperamos las propuestas para empezar a negociar), esto representará un incremento de gasto o una minoración de ingresos, pero al mismo tiempo reitero nuestra voluntad de avanzar acuerdos en este importante tema, tenemos que manifestar que si se consiguen acuerdos y se tiene éxito, por una parte tal vez las centrales sindicales vean satisfechas por esta vía, que es mucho más positiva para todos, su demanda de cobertura o de atención a los parados; y, en cualquier caso, una estimación mínima del plan de promoción de empleo para los jóvenes nos hace pensar en un gasto adicional o en una minoración de ingresos complementaria superior a los 100.000 millones de pesetas.

Temo que argumentar que ahora hay dinero y antes no lo había porque ha habido presión, no se ajusta a la verdad. El dinero se sacará de un presupuesto que aumenta ya el 15 por 100 respecto de la situación del año pasado. Temo que argumentar que se ponga lo ofrecido, aunque no haya acuerdo, porque afecta a otros, es por lo menos relativamente delicado cuando no peligroso, porque si se hiciera así, señorías, nunca con este Gobierno o con otro habrá el acuerdo social que garantice la contraprestación deseable en todo acuerdo, que es un clima de paz social. Si se hiciera así y se pusiera sobre la mesa lo que se pide sin la garantía de la contraprestación necesaria de corresponsabilización, con las prioridades y con un clima de paz social, habríamos roto para siempre la concertación social. Será más positivo para algunos o menos positivo, pero en todo caso correríamos ese grave riesgo.

Se está faltando a la verdad en la carta que han recibido los Grupos Parlamentarios. El programa electoral del Partido Socialista, una vez más repetiré que pactado con la UGT en este punto como en cobertura de desempleo y en todo el programa social, dice literalmente: «El Gobierno mantendrá el compromiso de la progresiva mejora de aquellas pensiones que se encuentran aún por debajo del salario mínimo interprofesional». Ese es el único compromiso del Gobierno y a ése he añadido, el día 21 de diciembre, más allá del compromiso del programa electoral, que equipararemos pensión mínima y salario mínimo en el período de la legislatura.

Por tanto, reiteraré, señorías, que me gustaría que se dijera pública y claramente en qué parte del programa hemos incumplido. Y si no hay incumplimiento, ¿por qué aquellos que acordaron el programa hoy no lo quieren respetar?

Sólo faltan del programa dos cosas que seguramente me serán reclamadas en el curso del debate: la ley de huelga, también acordada, y el Consejo Económico Social, también acordado.

■ **La ley de huelga** parece que en la posición actual de los sindicatos desencadenaría una mayor conflictividad en todos los órdenes, una mayor respuesta. Hemos sido prudentes hasta el momento para intentar no crear más diferencias. Por tanto, la crítica que recibamos por haber retrasado la presentación de la ley de huelga será una crítica justa que tiene sólo esa respuesta, una respuesta de sentirnos un poco más próximos a las posiciones de los sindicatos en una materia de alta sensibilidad. Pero la crítica será justa, porque la ley de huelga tiene que tender a garantizar el mantenimiento de unos servicios que son esenciales para el funcionamiento de la comunidad.

■ **El Consejo Económico Social** hemos querido hacerlo útil y, por tanto, hemos pedido a los interlocutores sociales que se pongan de acuerdo. Hay tres posiciones diferentes: la de la patronal, la de UGT y la de Comisiones Obreras. Frente a esas tres posiciones diferentes se llegó a un acuerdo en el verano pasado para que el Gobierno redactara una propuesta de

Consejo Económico Social. El Gobierno redactó y tiene hecha la propuesta del Consejo Económico Social, pero quiso consultarla, finalmente, con los interlocutores. Y a los tres interlocutores les parece mal en una o en otra medida. Por tanto, sería poco útil poner en marcha un Consejo Económico Social que no sirva para lo que es su finalidad fundamental, que es el diálogo social entre los interlocutores. Si no están de acuerdo con el instrumento, y yo creo que en algún caso también hay que decir que no se está de acuerdo con que haya instrumento, ¿cómo se va a establecer una vía de diálogo social?

■ **El derecho a la negociación colectiva de los funcionarios.** Hemos ofrecido, señorías, ya lo dije en esta tribuna, una fórmula sobre la que era razonable ponerse de acuerdo. ¿Qué es lo que ha ocurrido? A mi juicio, el acuerdo en este punto no ha sido posible, como en otros, por el simple hecho de que las centrales sindicales han cambiado su posición.

En la primera reunión mantuvieron que estaban decididos a negociar punto a punto y a cerrar aquellos puntos en los que hubiera acuerdo. Más tarde han pensado lo contrario, y lo que dijeron los secretarios generales en la reunión conjunta, lo desdijeron las delegaciones en el Ministerio de Trabajo. El análisis que hacen de la situación europea les podría llevar a otras conclusiones, porque de la simple lectura de ese análisis de la situación europea, que consta en algunas de las cartas, pueden deducirse resultados opuestos. Ponen como modelo Inglaterra, Bélgica, Italia o Suecia, y si están dispuestos a homologarse con modelos europeos en la regulación de los derechos y de los deberes de los funcionarios, el Gobierno está completamente de acuerdo, pero hay que asumirlo con todas sus consecuencias: derechos y deberes en el sector público, cosa, que me temo, que los sindicatos no van a estar muy predispuestos. Mientras tanto, el Gobierno reitera su posición, que ya expresó en la Cámara el día 20 de diciembre, y que llevará a la práctica en esos términos respecto al derecho de negociación de los funcionarios.

PERSPECTIVA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS

INTENTARE abreviar, siempre con la preocupación de que sobre este tema hemos concentrado —como decía al principio— una buena parte de nuestra atención, aunque también había oído que en algunas mentes existía la preocupación de que pasara por él sin tocarlo suficientemente en cuanto a la situación y a las perspectivas de la Comunidad Europea.

Lo primero que quiero destacar en este breve análisis de la situación de las Comunidades Europeas y de sus perspectivas es la naturaleza más de carácter interno que externo de la problemática que entraña.

Como todos saben (el descenso de atención pasando de un tema a otro es muy espectacular) (risas). Como todos saben —repito—, aunque a efectos formales sigamos considerando nuestra relación comunitaria como una parcela muy importante en nuestra política exterior, desde el punto de vista material las implicaciones que para nuestra sociedad tienen todas las cuestiones comunitarias deben llevarnos a considerarlas cada vez más como una parte sustancial de nuestra política externa. En este caso, las reflexiones sobre la creciente interdependencia entre los distintos países no necesitan siquiera el esfuerzo de la demostración.

Mercado interior

El Acta Unica europea suponía y supone un paso cualitativo en el proceso de construcción de la unidad europea que nace con el Tratado de Roma, paso tímido para algunos y excesivo para otros, que constituye un compromiso para los doce Estados miembros con un calendario de cumplimiento en sus aspectos más importantes y con una dinámica implícita, que obligará en el próximo futuro a nuevos cambios en las relaciones institucionales de la Comunidad e incluso puede que a nuevas instituciones.

Me importa más este análisis de conjunto, del que podremos destacar algunas de las prioridades inmediatas, que hacer hincapié en las tareas específicas que corresponden a la presidencia española en este período de seis meses que la rotación alfabética nos ha encargado. Quiero esto decir que, aunque para nosotros como país sea un desafío importante ocupar la presidencia por ser la primera vez, lo significativo es, sin embargo, saber o conocer por qué prioridades, con presidencia o sin presidencia, debemos trabajar en el proceso de construcción europeo.

El año pasado se aprobó en el Consejo extraordinario de Bruselas el llamado paquete de reformas o paquete Delors, que era considerado por algunos países, entre ellos nosotros, como una de las condiciones fundamentales para proseguir en los trabajos de desarrollo del Acta Unica y, en particular, para proseguir en las medidas encaminadas a la realización del mercado interior.

Sobre este importante aspecto del Acta Unica, la realización del mercado interior, se considera en medios comunitarios que se está avanzando a buen ritmo y que medidas cualitativamente muy relevantes, como la liberalización de movimiento de capital, van a exigir nuevos y decisivos pasos en otras materias.

Desde nuestro punto de vista, aun aceptando que hay una parte considerable del recorrido que se ha hecho, como ocurre con frecuencia se han ido retrasan-

do algunas decisiones que por ser más difíciles no se han querido afrontar en la primera fase. De aquí la primera consideración básica sobre el proceso. Las Comunidades corren el riesgo de no llegar al año 1992 con el paquete de medidas del mercado interior plenamente desarrollado, con lo que creo que corren un riesgo adicional: que algunas de las medidas ya adoptadas no puedan ponerse en funcionamiento por carecer de otras que algunos países consideran como complementos ineludibles.

Armonización fiscal

De esta manera, la libertad de movimientos de capital ha desencadenado un proceso de debate y de decisión en torno a dos cuestiones que se consideran directamente conectadas: armonización fiscal y cooperación monetaria. En ambas existen posiciones encontradas y ambas constituyen problemas de una gran complejidad y de una gran delicadeza que afectan a cuestiones de trascendencia para los distintos países.

España desea trabajar para que se alcance en los próximos meses algún acuerdo en lo que se refiere a la fiscalidad sobre el capital, lo que en el argot comunitario se llama la fiscalidad sobre el ahorro. La armonización de la fiscalidad indirecta va a exigir, sin duda, algún tiempo más y no se relaciona tan directamente con la liberalización de los movimientos de capital.

En la cuestión monetaria, señorías, los trabajos del Comité de Expertos parecen avanzar al ritmo necesario para disponer de las primeras conclusiones en el mes de abril, con lo cual el Consejo de Ministros de finanzas podría realizar un primer análisis en el mes de mayo y remitir el informe y su evaluación al Consejo Europeo de Madrid en el mes de julio. Cabría esperar que en este Consejo se pudiera de-

cidir sobre el calendario y sobre los primeros pasos, más que aportar resoluciones o tomar decisiones de fondo.

Es evidente que para España este problema se imbrica con nuestra participación en el Sistema Monetario Europeo, en el que quiero reiterar, una vez más, la voluntad del Gobierno de iniciar las conversaciones para la integración de la peseta, en un plazo, si es posible, breve de tiempo, pero se tienen que dar condiciones adecuadas para ello.

En la realización del mercado interior tenemos el empeño de avanzar en la supresión de fronteras físicas y en la normativa que también permita conseguir la libre circulación de las personas.

Hemos puesto en marcha un grupo de trabajo para que proponga fórmulas de cooperación en materia de seguridad para garantizar que la progresiva supresión de fronteras no conlleve un incremento de riesgos para la seguridad, en particular, en los aspectos que se relacionan con las nuevas formas de delincuencia que precupan a todos los países comunitarios.

Dimensión social

Y el tercer tema de gran entidad sobre el que hay que trabajar prioritariamente en las Comunidades Europeas es el de la dimensión social. En este tema, sin duda, el debate político e ideológico puede condicionar los resultados finales. Por el momento, se está trabajando en el análisis de las distintas legislaciones para tener un cuadro comparativo sobre las relaciones laborales e industriales entre los doce.

A lo largo de estos seis meses esperamos que puedan aprobarse directivas importantes sobre seguridad e higiene en el trabajo y que se pueda, aunque sea con algún retraso, analizar, en primera lectura, el texto de la Carta de Derechos Sociales, que ha sido encargada por la Comisión al Comité Económico Social. Digo que aunque sea con retraso porque han pedido un plazo hasta el mes de abril, aunque había el compromiso de presentarlo en el mes de enero.

En materia de espacio social hay un acuerdo básico entre todos —cuando digo entre todos afecta prácticamente a la totalidad de los Gobiernos y creo que también a los interlocutores sociales—, el que se refiere a la prioridad número uno, a la que ya hemos hecho referencia cuando hablábamos de nuestra situación económico-social.

Europa debe intentar un crecimiento sostenido que permita la generación de empleo y debe centrar su atención en la formación profesional continuada como un mecanismo básico de adaptación a los procesos de modernización económica y de cambios tecnológicos. Pero, además de las tareas que pueden llevarse a cabo mediante acuerdos entre los Gobiernos

con la participación lógica y necesaria del Parlamento, existe un instrumento fundamental para la construcción del espacio social, que es el diálogo social. De este diálogo debería surgir el acuerdo que permitiera articular la participación de los trabajadores en la gestión empresarial en el proyecto de sociedad anónima europea aún pendiente. De él deberían surgir también los compromisos de participación en los procesos de modernización y cambios tecnológicos que se están produciendo y van a seguir produciéndose. De él, en fin, debería esperarse una política concertada, capaz de conseguir los objetivos de generación de empleo y de competitividad que el espacio común debe alcanzar en relación con otras áreas de fuerte desarrollo. Y es evidente que para fomentar el diálogo nos encontramos con dificultades de tipo diverso. La primera, sin duda, o al menos en apariencia, sería la negativa de algunos Gobiernos comunitarios, como ocurre en el caso del Gobierno británico, a considerar el diálogo social como un instrumento fundamental en la creación del espacio social europeo.

Digo que al menos en apariencia, porque también los Gobiernos que deseamos ese diálogo como instrumento de participación en la toma de decisiones debemos superar la contradicción, que se convierte en acusación con frecuencia, de la carencia de acuerdos en el seno de nuestras propias sociedades con los interlocutores sociales y la pretensión de establecer un diálogo en el ámbito europeo. Dicho en términos más claros: poca fortuna tendrá nuestro esfuerzo para articular un diálogo social en el ámbito comunitario visto el poco éxito que conseguimos en el ámbito nacional.

Problemas comunitarios

Como sería imposible e innecesario hacer una enumeración exhaustiva de los problemas comunitarios, me limitaré a señalar, junto a los desarrollos de mercado interior —supresión de frontera y espacio social que acabo de exponer—, algunos de los que están en proceso de discusión.

Sería deseable, por ejemplo, que en el proceso de construcción europea llegáramos a dar el paso de permitir la intervención en las elecciones locales de todos los ciudadanos europeos, cualquiera que sea su nacionalidad y en el lugar en el que estén residiendo.

Tenemos el propósito de proponer al Parlamento Europeo que surja de las próximas elecciones un análisis riguroso de las repercusiones institucionales que para el futuro Parlamento tendrá el pleno cumplimiento del Acta Unica, porque estamos convencidos, con otros de los socios comunitarios, de que el ámbito competencial de las instituciones comunitarias conocerá necesariamente nuevos cam-

● **Europa debe intentar un crecimiento sostenido que permita la generación de empleo y debe centrar su atención en la formación profesional continuada como un mecanismo básico de adaptación a los procesos de modernización económica y de cambios tecnológicos.**

POLITICA DE PAZ Y SEGURIDAD

bios a partir del cumplimiento del Acta Unica, es decir, a partir de 1992.

No voy a entrar hoy en los problemas audiovisuales que han empezado a discutirse en el ámbito comunitario y en el Consejo de Europa como un capítulo importante, tanto desde el punto de vista de la difusión de la cultura como desde el punto de vista de la producción de programas y del desarrollo tecnológico.

En la gestión europea hay aspectos cotidianos que afectan a la vida de muchos de nuestros conciudadanos. Estamos haciendo un gran esfuerzo para conseguir la aprobación de los precios agrícolas en un tiempo útil, sobre todo, teniendo en cuenta que la ratificación por el Parlamento Europeo ha de hacerse antes del mes de mayo, por las elecciones de junio. Precisamente, por facilitar eso, ha sido considerada como muy positiva la aprobación, en el último Consejo de Ministros de Agricultura, del paquete de medidas pendientes desde la anterior presidencia.

Aunque sea un momento, nos debemos detener en la cooperación política comunitaria que, decidida como uno de los compromisos del Acta Unica, se añade a lo que se venía considerando la política exterior de la Comunidad de contenido preferentemente comercial. Es cada vez más evidente que las relaciones de la Comunidad con el mundo exterior tienen un fuerte componente político que no se puede disociar de la actuación tradicional en el campo comercial o financiero.

En el entorno europeo, tenemos a los países EFTA, con los que se está tratando de llegar a un acuerdo de cooperación mutuamente beneficioso que evite los peligros de frenar el proceso comunitario, dejándolo en una mera zona de libre cambio, y que evite los peligros de la consideración de la Europa-fortaleza que algunos empezaban a hacer.

Y junto a ellos se ha iniciado un proceso de cooperación con los países de la Europa del este, que están viviendo una apertura hacia occidente y que tienen una clara identidad europea más allá de la barrera de carácter ideológico y político. En el inmediato futuro trataríamos de conseguir un acuerdo de cooperación con la Unión Soviética, para acompañar el impulso reformista que se está viviendo en este país.

Fuera del continente europeo, la Comunidad tiene algunos contenciosos, hay que decir que casi siempre recurrentes, con los Estados Unidos en el terreno de los intercambios comerciales que, a nuestro juicio, es imprescindible superarlos —y estamos intentando conseguirlo— a través de un diálogo que respete los intereses recíprocos.

América Latina

Para España tiene una especial trascendencia la relación comunitaria con América Latina. El continente latinoamericano no ha sido tradicionalmente incluido en el ámbito de la cooperación comunitaria, ni tan siquiera ha sido considerado como un interlocutor en un diálogo interregional.

Algunos países europeos tienen —sin duda, prácticamente todos— relaciones con los países del continente latinoamericano, pero hasta ahora nunca se ha avanzado en el proceso de diálogo entre ambos conjuntos. Sin embargo, si consolidamos el tipo de encuentros que se vienen realizando entre los ministros de Exteriores comunitarios y los cancilleres del Gru-

po de Río, habremos dado, a nuestro juicio, un paso particularmente importante en esta dirección. Pero junto a este diálogo político pretendemos que se apruebe un incremento sustancial en la cooperación con Centroamérica, para que sirva de acompañamiento y de apoyo al proceso de paz y de democratización en los países de la región, y estamos trabajando para conseguir una aproximación de posiciones ante el grave problema de la deuda que afecta al desarrollo económico y a la estabilidad política de los países iberoamericanos.

Coincide este período con el hecho significativo de que la cooperación comunitaria para el desarrollo esté bajo la responsabilidad de dos comisarios españoles. Aunque es evidente que institucionalmente no existe relación alguna entre su nacionalidad y su responsabilidad, no lo es menos que para nosotros constituye un factor importante en la cooperación con los países ACP (África, Caribe y Pacífico), con los países mediterráneos y con América Latina.

Querría recordar finalmente que la presidencia española ha recibido un mandato de los doce para explorar las perspectivas de cooperación en la paz del Medio Oriente.

Nuestra convicción es que la Comunidad debe jugar un papel activo para fomentar un diálogo que facilite el camino de una solución pacífica y debo decir que no se trata realmente de destacar el papel de unos u otros, sino de coadyuvar a conseguir, con prudencia y eficacia, una mejora de la situación, primero, y ayudar a conseguir un acuerdo después.

En definitiva, referido al conjunto de los trabajos comunitarios, tenemos la obligación, en la parte que nos corresponde, de lograr avances en esa compleja y difícil tarea. Y estos avances, señorías, para que lo sean de verdad, tienen que ser asumidos por todos, lo que excluye la tentación de adoptar posiciones para consumo interno, aunque éstas perjudiquen el progreso efectivo de la unión europea.

HARE una breve referencia a la política de paz y de seguridad, casi en términos telegráficos. En el año 1984 expusimos ante el Parlamento lo que considerábamos como elementos fundamentales para definir una política de paz y de seguridad para nuestro país. En 1988 ha concluido la fase definitiva de la dimensión exterior de nuestra política de seguridad. El pasado 8 de diciembre fueron aprobadas formalmente por el Consejo Atlántico las directrices generales que establecen el marco de nuestra contribución militar dentro de los términos establecidos por el referéndum, es decir, respetando nuestra no integración en la estructura de mandos militares de la Alianza. El propio hecho del acuerdo significa que el modelo satisface los intereses de seguridad de España y los de los demás países aliados.

En lo que se refiere a nuestra relación defensiva con Estados Unidos, el pasado 1 de diciembre se firmó el Convenio bilateral sobre la cooperación para la defensa, actualmente pendiente de aprobación por las Cortes Generales. En el mismo se introduce un elemento de racionalización en nuestras relaciones con Estados Unidos y se precisa con claridad el carácter soberano del vínculo que nos une. Se cumplen en el Convenio las exigencias de reducción de presencia militar norteamericana en España y las referidas a la no instalación, almacenamiento o introducción de armas nucleares en nuestro territorio, decididas por este Congreso en 1981 y por el referéndum en 1986.

El pasado 14 de diciembre España firmó, como saben, el Protocolo de adhesión a la Unión Europea Occidental, pen-

diente igualmente de aprobación por las Cortes Generales y también de ratificación por los parlamentos de los demás países miembros. Con la firma del Protocolo se subraya la decisión de compartir con los demás países europeos no sólo el destino político, el económico o el social, sino también el destino de seguridad y de paz.

● Estamos viviendo un momento decisivo en las relaciones internacionales con efectos, a nuestro juicio, muy positivos para la distensión y con expectativas claras de progreso en materia de desarme.

Como saben, la Comunidad no puede ser el foro para introducir la dimensión de la seguridad en la construcción europea. Por tanto, la UEO aparece como el marco más propicio para el desarrollo de la identidad europea en esta materia.

En anteriores debates hemos hablado de nuestras posiciones en materia de desarme y de distensión, por lo que ahorraré la repetición. Sólo quiero recordar a la Cámara que estamos viviendo un momento decisivo en las relaciones internacionales con efectos, a nuestro juicio, muy positivos para la distensión y con expectativas claras de progreso en materia de desarme. El cambio de orientación en la Unión Soviética y en algunos países del Pacto de Varsovia constituye un elemento primordial de la nueva situación. No es ocioso afirmar, desde un país europeo occidental como España, que deseamos que la «perestroika» y la transparencia informativa, puestas en marcha en la Unión Soviética, tengan éxito y superen los graves obstáculos que, sin duda, las amenazan.

Por primera vez en el plano internacional, señorías, se puede empezar a hablar de una evolución reformista y democratizadora en los países comunistas, que podríamos calificar como el primer paso de una apertura hacia los modelos occidentales, que puede comportar consecuencias extraordinarias para el futuro común.

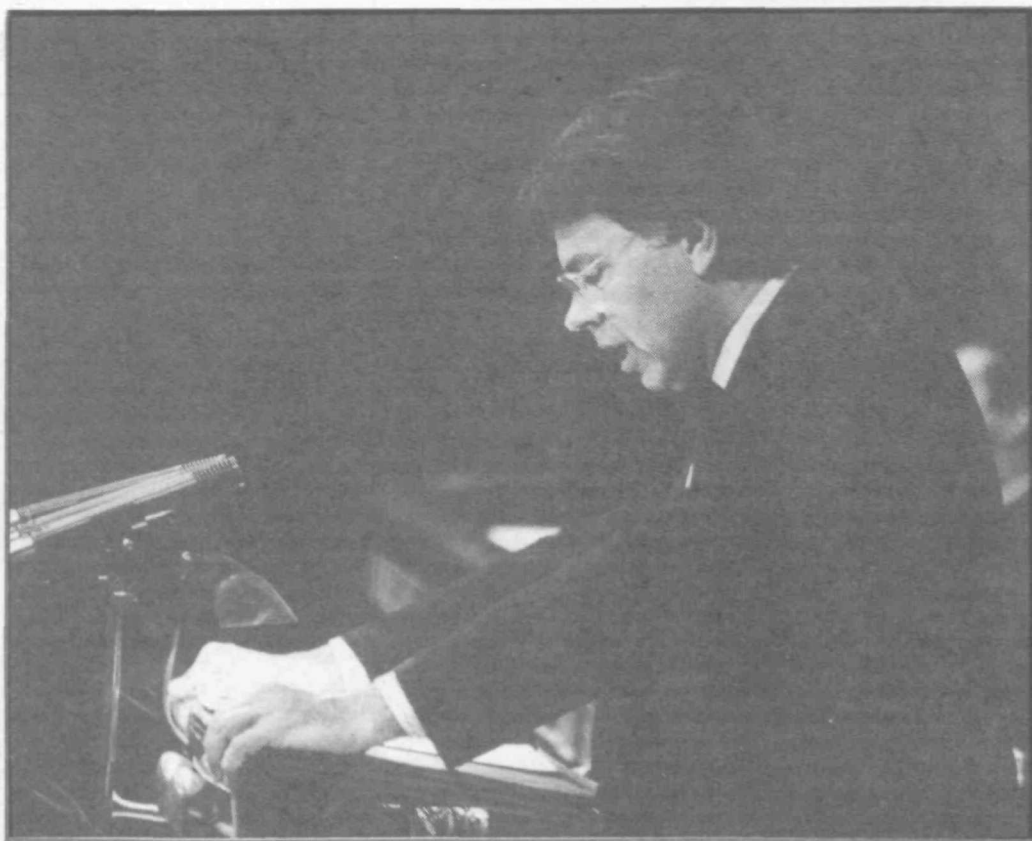


Foto: M. Otero

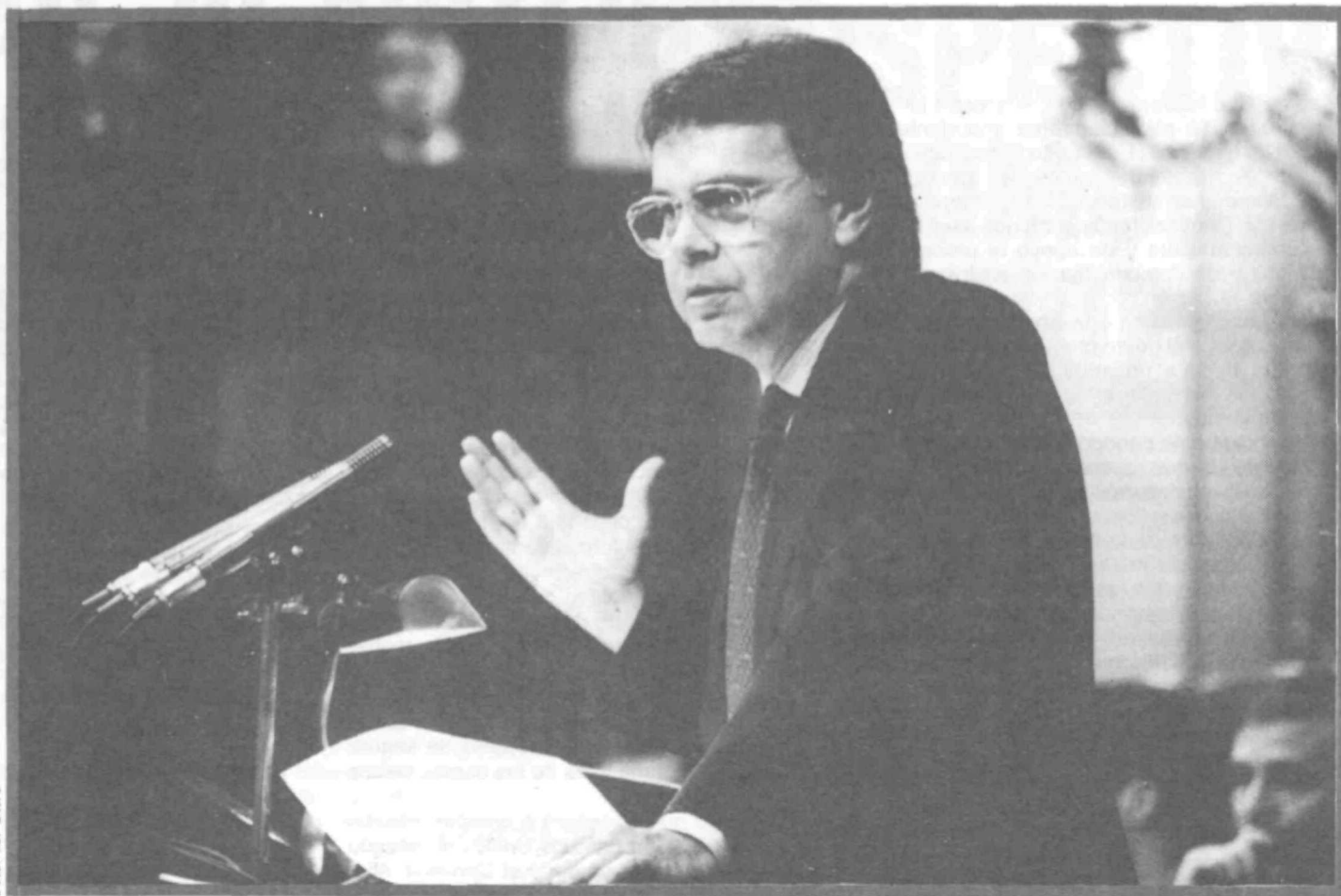


Foto: M. Otero

POLITICA ANTITERRORISTA

SOBRE el terrorismo, seré parco en mi intervención, puesto que los responsables políticos tienen información discreta sobre la evolución de esta importante cuestión, pero destacaré los hechos que me parecen más relevantes de la evolución en el año 1988, que creo que con prudencia —repito, con prudencia— podemos considerar una evolución positiva.

En primer lugar, destacaré los acuerdos entre las fuerzas políticas democráticas en todo el Estado y en el País Vasco. El valor en sí del consenso y el contenido de estos acuerdos son un instrumento esencial en el avance por la erradicación de la violencia. El Gobierno hará el máximo esfuerzo para preservarlos y les daré, en todo caso, fiel cumplimiento.

● **Creo que no debe descartarse, en ausencia de actos violentos, la posibilidad de conseguir la paz con la reincorporación a la vida normal de los que deseen hacerlo, a través de conversaciones al efecto, dentro de los límites establecidos de común acuerdo por todas las fuerzas políticas.**

Respecto del acuerdo que se firmó en Vitoria, me gustaría recordar que hace años reclamaba, desde el punto de vista personal y de partido, en el velódromo de Anoeta, la necesidad de llegar a un común denominador entre las fuerzas políticas del País Vasco, que garantizara una cooperación sobre una base sólida de democratización y de ejercicio de la democracia y de la autonomía en un clima de paz. Esto es lo que creo que constituye el acuerdo firmado.

En segundo lugar, quiero destacar el incremento de la eficacia policial y también el incremento de la eficacia en la cooperación internacional. Se refiere ésta a nuestros vecinos del norte o también a nuestros vecinos del sur.

En tercer lugar, creo que no debe descartarse, en ausencia de actos violentos, la posibilidad de conseguir la paz con la reincorporación a la vida normal de los que deseen hacerlo, a través de conversaciones al efecto, dentro de los límites establecidos de común acuerdo por todas las fuerzas políticas. Todos deseamos, señorías, en esta materia, que la situación evolucione en esa dirección y todos comprendemos, teniendo en cuenta la experiencia histórica, la enorme dificultad de este empeño.

Por tanto, con discreción y con prudencia, hemos de continuar el trabajo emprendido.

CONCLUSION

Y concluyo, señorías. Vivimos una situación especial, temo que cargada de una confusión que oculta una buena parte de la evolución de la realidad.

He centrado mi intervención en la situación económico-social y reitero la idea básica: la mejora ha continuado en 1988, pero existen amenazas claras para seguir manteniendo el necesario ritmo de crecimiento económico y de creación de empleo. La concertación, entendida como lo hemos venido haciendo en los años anteriores, es muy importante para conseguir los objetivos básicos de nuestra economía. Tan importante es ponerse de acuerdo para combatir la crisis como hacerlo para sostener el crecimiento y la modernización, y en ambos supuestos hay que trabajar con rigor y con vigilancia.

Sería lamentable, señorías, que tuviéramos que esperar a otra fase de ajuste para llegar a

acuerdos de concertación cuando hoy es posible evitar que la situación nos conduzca a otra fase de ajuste.

La integración europea es un desafío positivo, pero difícil. Queremos acercarnos al nivel de renta de la Comunidad, a su nivel de bienestar social y para ello tenemos que trabajar de acuerdo en el camino a seguir económica y socialmente, y no creo que haya una fórmula mejor. España ha definido su relación internacional en materia de seguridad y es verdad que nos queda por delante, siempre quedará, la tarea de marchar con los demás en la búsqueda de un mundo más seguro y más solidario. Los que piensan que eso se puede hacer más eficazmente desde la unilateralidad o desde el aislamiento yo creo, honestamente, que se equivocan.

Finalmente, estamos avanzando en la consolidación de una convivencia pacífica, aunque las amenazas terroristas subsistan, con la gravedad que esto entraña. Y en este cuadro, que no lo contempla todo obviamente, el Gobierno se propone seguir trabajando por el cumplimiento de su programa electoral, consciente de que ése es su compromiso sustancial ante los ciudadanos, no el que le quieran atribuir otros.

La situación es complicada políticamente, aunque, paradójicamente, la realidad sea más positiva que en otros años y las perspectivas incluso sean más esperanzadoras. Pero así ocurre en política y los responsables políticos tenemos que aceptarlo y superarlo, si nos es posible. A esto vamos a dedicar nuestro esfuerzo con la voluntad de que la sociedad española no pierda sus buenas oportunidades de presente y de futuro inmediato.

El partido se propone dinamizar su militancia y aumentar su presencia en el mundo del trabajo

Crear nuevas formas de organización

El pasado día 6 de febrero se reunieron en Madrid los secretarios regionales y provinciales del PSOE para analizar la situación política y debatir distintos aspectos relacionados con la estructura organizativa del partido. En la reunión, en la que estuvieron presentes José María Benegas, secretario de Organización; José Félix Tezanos, secretario de Formación; Alejandro Cercas, secretario de Movimientos Sociales y Participación Ciudadana; Dolores Renau, secretaria de Participación de la Mujer, y los secretarios ejecutivos, Carmen Hermosín, José María Sala y José Acosta, se trató la decisión de crear nuevas formas de organización del partido en los centros de trabajo.

Tras la reunión se anunció la intención de crear la figura del responsable político dentro de las empresas para organizar la militancia socialista existente en las mismas.

Informar a los militantes del PSOE de la política económica y social del Gobierno y de los proyectos del partido, y atraer a otros trabajadores para incrementar la afiliación, serán las funciones de estos responsables políticos que, aunque no se han establecido aún plazos definitivos, empezarán a implantarse en breve en las empresas con más de mil trabajadores. En contra de la polémica suscitada por esta iniciativa en los sindicatos, y como ha afirmado José María Benegas, con esta estructura el partido no pretende realizar ningún tipo de actividad sindical.

Los responsables políticos del PSOE no intervendrán en la negociación colectiva ni harán uso de las facilidades concedidas a las centrales sindicales. No serán elegidos por los trabajadores, sino que se escogerán por las direcciones provinciales del partido, de acuerdo con los militantes de cada empresa y en las elecciones sindicales apoyarán a las candidaturas de la UGT.

Con esta iniciativa, que algunos partidos socialistas europeos desarrollan desde hace tiempo, según ha afirmado José María Benegas, se quiere recuperar el trabajo político que hasta ahora desarrollaba la UGT en el seno de los centros de trabajo.

Como ha recordado José María Benegas, ya se acometió la creación de un embrión de organización del PSOE en



En la reunión con miembros de la Comisión Ejecutiva, los secretarios de Organización regionales analizaron sus planes de trabajo.

las empresas, en la etapa en que Carmen García Bloise fue secretaria de Organización. «Luego se descansó esa estructura en la UGT, pero ahora estamos en una situación en la que el sindicato discrepa de la política económica y social del Gobierno, y es lógico que queramos tener una presencia directa.»

Dinamizar las agrupaciones

También se debatió en la reunión el desarrollo del programa de cuadros responsables en el seno del partido, cuya función principal es la de fomentar la participación y actividad de los militantes.

Este programa, aprobado en el XXXI Congreso del PSOE, ha iniciado su puesta en marcha, en una primera fase, en las agrupaciones locales de más de 150 afiliados, a través de la formación de los monitores que instruirán, a su vez, a los responsables. El plan, en el que colaboran las secretarías federales de organización y formación, intenta

agilizar y dinamizar el trabajo de las agrupaciones en base a un contacto permanente del responsable con los afiliados.

Como se regula en los estatutos federales, el Comité Local de las agrupaciones con más de cincuenta afiliados contará con la colaboración de un número de responsables designados por él mismo. La cifra de responsables en cada agrupación local será de uno por cada diez afiliados como máximo, o uno por cada veinte como mínimo. En aquellas con menos de cincuenta militantes corresponderá al Comité decidir el número de responsables.

Las actividades del responsable son las de incrementar el encuadre de los afiliados al partido en los movimientos sociales, transmitir información política y orgánica, fomentar la actividad de los militantes en las campañas electorales, difundir la propaganda, dinamizar los grupos de trabajo e informar y contactar con los afiliados que no acudan a las reuniones o dejen de abonar las cuotas, entre otras.

Socialismo sin trabajadores, no

José María Benegas (Secretario de Organización de la CEF del PSOE)

EL anuncio por parte del Partido Socialista de reforzar su militancia social en el mundo del trabajo ha suscitado una polémica, cuando menos sorprendente. Se nos dice que el Partido Socialista no debe tener presencia en el movimiento obrero ni en los centros de trabajo, o que es un error esta iniciativa. Debe ser conveniente, para no sé qué intereses, que entre los trabajadores no haya nadie identificado como socialista. Se nos propone una novedad teórico-intelectual sumamente curiosa: hagan ustedes socialismo ausentes de los centros de trabajo y de las fábricas. A esas voces de protesta se han sumado dirigentes comunistas expertos en organizar las células de fábrica, estructura que mantienen en la actualidad. Agradecemos los consejos que sobre nuestra organización se nos vienen dando estos días, pero permítasenos que prefiramos seguir pensando que un Partido Socialista debe tener presencia, no exclusiva, pero sí importante, allí donde están los trabajadores.

El Partido Socialista es una organización política en la que se está voluntariamente. Son sus afiliados los que deciden soberanamente cómo se organizan dentro de los límites que establece la ley. La Constitución, en su artículo sexto, hace referencia a los partidos políticos y establece que «su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y su funcionamiento deberán ser democráticos». No conocemos ninguna disposición legal que impida a los partidos políticos organizarse en los diferentes sectores de la sociedad.

Concedásenos, al menos, a los que formamos la militancia socialista el derecho a auto-organizarnos como mejor nos parezca en el marco de la legalidad vigente. Estamos ejercitando un derecho consustancial al pluralismo político y a la democracia. A lo largo del tiempo, los partidos han ensayado múltiples fórmulas de organización de su militancia: territoriales, sectoriales, por centros de trabajo, por lugar de residencia o por frentes de lucha, como se decía antaño. Todas ellas perfectamente válidas y legales. En cada momento, y en función de sus objetivos, el partido político decide soberanamente qué modelo de organización le parece más eficaz para tener una mayor presencia en la sociedad.

Es posible que ciudadanos de buena fe no hayan entendido o puedan malinterpretar lo que pretendemos. Todos los partidos socialistas, desde sus orígenes, han tenido especial cuidado de mantener una presencia muy viva en el mundo del trabajo. Esta ha venido dada no sólo por una importante afiliación y un apoyo electoral muy amplio de los trabajadores a los partidos socialistas, sino también por la existencia de instancias organizativas concretas que han permitido que el socialismo perviva durante más de un siglo en las fábricas y lugares de trabajo. Esto es algo tan coesencial a nuestro ideario, que es difícil entender cómo se puede poner en duda su conveniencia o su perfecta legitimidad. El mayor componente de la afiliación del Partido Socialista Obrero Español lo integran trabajadores. Queremos mejorar los cau-

ces de comunicación orgánica que nos permitan informarles directamente de la política de Gobierno y de los proyectos socialistas. Conocer sus preocupaciones y sus problemas. Ampliar nuestra presencia en el mundo del trabajo y nuestra afiliación. Discutir y reflexionar conjuntamente. En definitiva, mejorar nuestra organización para defender un proyecto socialista entre los trabajadores. ¿Es ello algo ilícito en los tiempos que corren? Estas explicaciones serían ociosas en una democracia madura, pero al parecer, en este país todavía son necesarias.

Para conocimiento de algunos debo añadir que la mayor parte de los partidos socialistas y socialdemócratas europeos tienen organización en los centros de trabajo. El Partido Socialista francés cuenta con las «Secciones Socialistas de Empresa», que celebran anualmente una convención nacional. El Partido Socialdemócrata sueco mantiene dos estructuras en los centros de trabajo: la sección sindical del partido, que milita en el sindicato, y el delegado de fábrica del partido. El Partido Socialista austriaco, el SPD, etcétera, exactamente igual. El PSOE, a lo largo de su historia, y hasta un etapa reciente, organizó en las empresas los grupos sindicales socialistas. No quiero extenderme en más ejemplos. Simplemente señalar que no estamos inventando nada nuevo. Porque no es nuevo el principio en virtud del cual los socialistas tenemos la obligación de ser socialistas en todos los sitios: también en los centros de trabajo y en las fábricas.

Desde que, hace treinta años, las Naciones Unidas aprobaron la declaración de los derechos del niño, va poco a poco asentándose el concepto de «menor» como sujeto de derechos y deberes, aunque algunos de ellos estén limitados en función de la edad.

Durante años, los niños y jóvenes han sido considerados propiedad privada de los padres.

Se identificaba al menor de edad con una situación de necesidad y, por tanto, en condiciones de ser protegido. Se le daba protección respecto a los malos tratos o a las carencias físicas. Pero también debía ser tutelado de acuerdo con conceptos morales. Se creía que había que salvaguardarle de los malos hábitos, de los malos ejemplos, lo que servía para mantener al niño en una situación de inferioridad de forma encubierta.

Hechos como la creación de la Fundación Internacional de Defensa de los niños o la celebración del Año Internacional del Niño han facilitado, de forma creciente, la consideración social de que el menor es un ciudadano de pleno derecho. Y como tal, debe recibir de los poderes públicos, de las instituciones y de los ciudadanos el apoyo para hacer efectivo este derecho en condiciones de libertad, igualdad y solidaridad.

La Constitución acaba con la imagen de sujeto irresponsable que del niño se tenía. Le dota de derechos. Y por lo que se refiere al modelo de atención al niño, se pasa de la beneficencia, de la caridad y el castigo del tribunal a un sistema de servicios sociales.

Con este enfoque, en su XXXI Congreso, el PSOE consolida en el seno de la Secretaría de Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, la Comisión Federal del Menor, con el objetivo de impulsar dentro del partido una estructura preocupada por la situación de los niños y definir una política de acción integral para éstos.

Esta comisión pretende abordar el tema del niño en su globalidad, como un sector de la población —entre cero y dieciocho años—, en el que influyen todas las políticas sociales (educación, sanidad, servicios sociales, justicia...). «Intentamos llegar a toda la población infantil y juvenil, no sólo al menor en situación marginal, aunque se siga trabajando con problemáticas como la delincuencia», dice Amadeo Enríquez, coordinador de la Comisión Federal del Menor.

El objetivo de este grupo de trabajo, que va implantándose en los distintos niveles de la organización territorial del partido, es actuar tanto en el terreno de lo ideológico, de la formación y del diseño de propuestas de acción, como la práctica.

En el ámbito de lo cotidiano, esta comisión tiene previsto potenciar los proyectos de campamentos de verano



EL MENOR un ciudadano de pleno derecho

que realizan los movimientos asociativos progresistas. «Queremos —dice Amadeo Enríquez— que las actividades de los campamentos se distingan por su calidad, y por eso, los monitores que trabajen en los mismos tendrán que contar con una preparación especial.»

Se pretende que estas asociaciones de ocio y tiempo libre cubran la demanda que existe en amplios sectores de la sociedad de actividades de carácter recreativo y cultural destinadas al niño, desligadas de organizaciones confesionales o residuales del régimen anterior.

A la vez, con este proyecto, la Comisión Federal del Menor estima que

nuestro país es uno de los objetivos principales de este grupo de trabajo. Para ello, uno de los puntos del programa de actuaciones para el presente año es la realización de un informe técnico sobre la realidad del menor en España y sobre el asociacionismo infanto-juvenil.

«Para ello —explica Amadeo Enríquez— estableceremos una comunicación permanente con los más cualificados expertos en la temática del menor y las personas que tienen un trato más cotidiano con los niños, como son los mismos padres.»

Para dar cauce a este intercambio de información, la Secretaría de Mo-



se logrará otra de sus metas: fomentar el asociacionismo entre los chavales. Conseguir que los adolescentes formen sus propias asociaciones, en función de sus intereses por la ecología, el deporte, la cultura o cualquier otra actividad. Hacerles responsables de estos grupos asociativos e incluso que los mismos chicos los dirijan, es la intención de la comisión.

Potenciar el asociacionismo

Conocer a fondo la situación de la población infantil y del adolescente de

los movimientos sociales quiere potenciar los movimientos asociativos, facilitando un encuadre adecuado a todos aquellos colectivos profesionales con incidencia en el ámbito infantil, así como a asociaciones de amas de casa o de padres de alumnos.

Política global

Como se reconoce en los documentos de trabajo de la Comisión Federal del Menor, la base de una política integral destinada a la población infantil debe ser la cobertura de sus nece-

sidades básicas, tanto alimentarias y familiares como educativas, sanitarias, etcétera.

«Hay que tener en cuenta que según va caminando por distintas etapas, el niño tiene distintas necesidades, pero lo importante es que hay que facilitarle una situación de bienestar», afirma Amadeo Enríquez.

Para asegurar este bienestar al niño, el PSOE se propone seguir adecuando, como un primer paso, el instrumental legislativo a las necesidades reales del menor, y en este sentido se considera muy importante disponer de un marco legal apropiado con el que se regularía el derecho a las prestaciones sociales básicas.

Desde lo educativo, y desarrollando la LODE, sigue siendo un objetivo enexcusable la mejora del sistema público de educación, que garantice una enseñanza adecuada para todos, tratando las desigualdades de origen con apoyos materiales y económicos.

En el marco de la sanidad, una de las propuestas es incidir en la implantación de programas de salud materno-infantil que aseguren unas condiciones adecuadas del embarazo, nacimiento y desarrollo de los primeros años de vida del niño. También habría que potenciar la creación de programas de salud preventiva para los niños y adolescentes.

También, en materia de sanidad, Amadeo Enríquez apunta que uno de los retos sigue siendo conseguir la racionalización y humanización de los sistemas sanitarios. «Si las grandes residencias y hospitales han sido monstruosos para el adulto, ¿cómo no lo van a ser para los niños? No es que piense que finalmente los pediatras tengan que ir vestidos de Mickey Mouse para atender al niño, pero sí tendrán que ir adecuándose a la realidad de los chicos», señala.

Dentro de los servicios sociales, las líneas de acción defendidas por la Comisión Federal del Menor pasan por la ayuda a las familias en situaciones carenciales como medio de atención e integración del menor.

Junto a ello, el niño merece que se vaya mejorando la oferta de ocio y cultura que recibe, y que durante los últimos años ya es una preocupación de la Administración, especialmente por parte de los ayuntamientos.

Según Amadeo Enríquez, otro punto de atención debe ser el consumo, en lo que la Administración está actuando adecuadamente. «El niño es un gran consumidor y con una base de defensa muy poco desarrollada, por lo que hay que conseguir que él mismo asuma su papel de usuario y mejore sus consumos.»

Por último, no habría que olvidar la importancia que para el bienestar del niño tiene el medio en el que se mueve. Las estructuras urbanísticas que diseñan los adultos no tienen en cuenta, en la mayoría de los casos, al niño y éste se siente agredido por su entorno.

Para Amadeo Enríquez, es urgente buscar sistemas de humanización de las grandes ciudades, «para que el menor no sea sumergido en habitáculos de donde no puede moverse y en los que la única ventana de salida es la pantalla del televisor».

Victoria R. Lira

Reformar la Real Academia Española

Con motivo de la elección de don Manuel Alvar López como nuevo director de la Real Academia Española, ha vuelto a ponerse de cierta actualidad hablar de los problemas de la Academia y del idioma español. Algunos comenzamos a preguntarnos si no ha llegado ya el momento de acometer una seria reforma de la Real Academia Española.

Dotar a la venerable institución de un amplio presupuesto veinte o treinta veces superior al actual, enraizar a la RAE en la sociedad española, aumentar espectacularmente el número de sus efectivos, tanto de sus Miembros de Número como de las personas adscritas a su servicio en el Instituto de Lexicografía. Se trata, en definitiva, de un verdadero programa democratizador y vivificador que ya ha sido presentado ante algunas instancias oficiales, pero que no sabemos si llegará a concretarse en la oportuna reforma legal.

La democratización y aumento de miembros de la RAE se contempla de la forma siguiente: aumentar en 25 el número de sus componentes, cuya elección será democrática. En cada comunidad autónoma española se elegiría a un miembro, y en la elección participarían todas las instituciones, entidades, asociaciones y federaciones del mundo de la cultura. Se elegiría otro en Ceuta y otro en Melilla, por el mismo sistema. El resto —seis—, hasta completar el número de veinticinco nuevos miembros, lo serían por las instituciones, entidades, asociaciones, federaciones, etcétera, del mundo de la cultura, de ámbito nacional español.

Los actuales miembros de las letras mayúsculas y minúsculas seguirían el mismo sistema de elección que hasta ahora.

La Real Academia Española no puede permanecer como una torre de marfil, porque, si bien muchos de sus miembros hacen grandes esfuerzos de acercamiento a la sociedad, la sociedad permanece muy distante de la Academia.

Son momentos decisivos para nuestra lengua española. El ingreso en la Comunidad Económica de Europa Occi-

dental, la situación del idioma en Filipinas y Guinea Ecuatorial, las dificultades de los hispanohablantes en Norteamérica y la España autonómica significan otros tantos retos para la unidad fundamental del idioma español que debamos legar al siglo XXI.

La reforma y mejora de la Real Academia comienza a ser una cuestión absolutamente prioritaria.

Eduardo de Prado Alvarez
(Barcelona)

Pote gallego

Los socialistas, el PSOE, al aceptar el pluralismo político como norma democrática —según mi criterio—, rechazamos la perpetuación en el poder. No queremos ser el partido único, por no ser bueno para la libertad y la democracia, para la paz y la concordia. Además, ya hubo, por desgracia, un partido único en nuestro país y del análisis de su existencia, de sus orígenes, contenidos y consecuencias todos debemos estar distanciados. Considero que los socialistas, luchando democráticamente, debemos ver como hecho natural en nuestro estado democrático plural la alternancia en el poder. Pero también hemos de asegurar que se realice cuanto más tarde mejor y por una fuerza política democrática consolidada, que responda a una fundamentación socioeconómica sólida, no a un conglomerado de intereses que sólo tienen por objetivo ir «contra de», no actuar «para de». Estamos, pues, contra esa volubilidad no responsable que ha sido, y es, norma de conducta de las fuerzas de la derecha, que se ven y desean para intentar saber ser y estar.

¿Ya tenemos configurada la derecha democrática con la aparición del PP (Partido Popular)? Para mí que no. Veo muy difícil que un partido que

se configura ideológicamente «como conservador, liberal y demócrata cristiano» (y no sé cuántas cosas más) pueda casar conceptos de tan imposible maridaje. Además, tal configuración ya estaba dentro de Coalición Popular, y los mismos, hoy «pepistas», lo hicieron saltar hace bien poco por los aires, por lo que cabe preguntarse, ¿dónde está esa ética y responsabilidad política, en ese tejer y destejer de partidos en coaliciones y de coaliciones en partidos? ¿Se puede dar patente de credibilidad a quienes, como núcleo central del PP actual, hace dos años desbancaban por «aclamación» a Fraga y hoy por «aclamación» lo elevan al liderazgo pepista?

Hasta la celebración del congreso con la aparición del PP, don Manuel ha demostrado su talante de «demócrata convencido», aplicó el llegué, vi y vencí como señor feudal, haciendo y deshaciendo a su antojo. Y estas verdades, gusten o no, están ahí, en los hechos recientes, donde una vez más Fraga ha puesto de manifiesto sus orígenes, los principios de su verdadera vida política.

Ya tenemos PP comandado por Fraga. Ha logrado arrastrar al mismo políticos viejos de su entorno formativo. Ha creado un pote gallego, mezclando sus garbanzos con algo de «oreja y tocino», pero sin «tizones ni manchas», algo híbrido y sin salsa, pero con gran dosis de populismo.

El, que considera al PSOE con esa demagogia que le caracteriza, «ni estado ni partido», «ni chicha ni limoná», etcétera, olvida deliberadamente que ese partido, el socialista, con sus aciertos y posibles errores, ha sido capaz de levantar a España de esa postración milenaria a la que ha estado sometida, por esa derecha tradicional e inmovilista que él, cabalmente, representa y que, en sólo seis años, ha pue-

to a flote económicamente a nuestro país, que ha reducido considerablemente los índices de inflación, que ha producido, con dolor, reconversiones necesarias, que ha abierto las puertas de Europa a nuestro pueblo, que está edificando un porvenir venturoso para todos los españoles: que ha transformado a España. Esto es lo que él no perdona.

Muy mal ha empezado don Manuel Fraga su nuevo liderazgo. Yo sé que en el nuevo PP (como antes en Alianza Popular) hay gente honesta, abierta al proceso y avance democráticos, pero sin la moralina franquista que a él le caracteriza y de la que se vanagloria. Es deseable que le sepan tirar de las riendas a su indómito e irreflexivo jefe, que puedan refrenar sus impulsos de siempre, que sus demagogias baratas y populismo peligroso no se impongan, lo veo difícil, y que sus fobias viscerales desaparezcan también.

Creo, sinceramente, que el pote gallego de don Manuel no es, hoy por hoy, la derecha democrática necesaria en nuestro país.

Juan Gómez Tomás
(Albacete)

La situación político-sindical

Si la actual situación político-sindical se pudiera valorar con rigor matemático, ya podría decirse que en la huelga general del 14-D ha habido dos claros perdedores: el PSOE y la UGT, que fue, paradójicamente, el sindicato que junto a CC.OO. convocó y apoyó esta huelga, contra sus viejos compañeros y aliados del Gobierno socialista. Y este negativo resultado era, y continúa siendo, previsible y de cálculo elemental, pues lo mismo un partido político que un sindicato que están aliados,

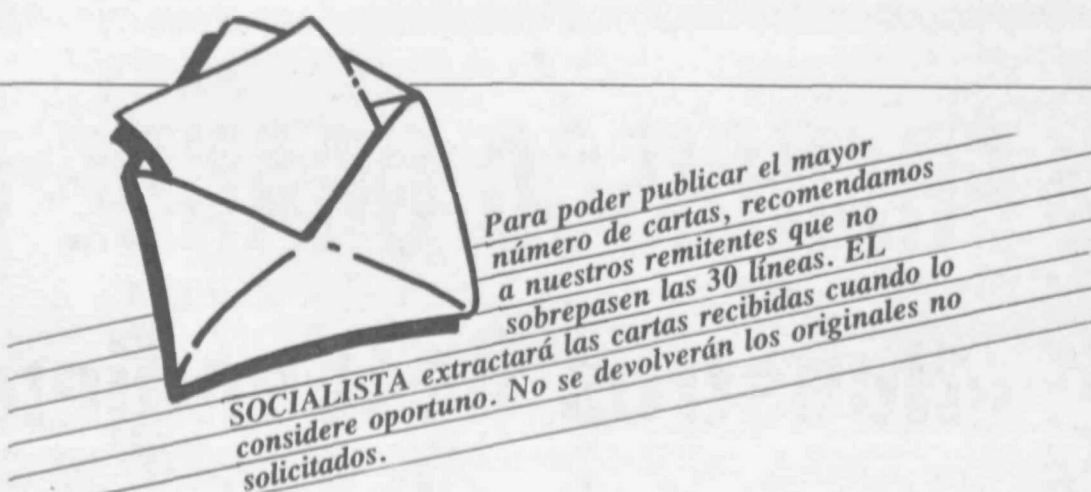
para poder ganar, tienen que sumar sus fuerzas y no restarlas, que es lo que en esta ocasión han hecho el PSOE y la UGT. Y por eso mismo se puede vaticinar, con bastante fiabilidad de acierto, que si la UGT continúa separada y enfrentada del PSOE, inevitablemente perderá apoyo social y, por consiguiente, fuerza sindical, y que, por su parte, el PSOE sin la UGT perderá también votos en las futuras confrontaciones electorales.

En cuanto al bloque político-sindical que configuran los comunistas de IU y CC.OO., objetivamente se puede predecir que en el 14-D ganan. Pues logran romper el tándem UGT-PSOE y, a la vez, subordinan y asocian a la UGT, a su dinámica de sistemática confrontación y agitación sociolaboral, con el preconcebido objetivo de desgastar al Gobierno socialista. Pero es impensable que los comunistas puedan llegar a convertirse, a nivel nacional a corto y a medio plazo, en un partido político con serias opciones de alcanzar o de arriarse al poder.

Y respecto al CDS de Adolfo Suárez, se puede decir que en el 14-D, previsiblemente, gana, pero que su constante ambigüedad y mal disimulado oportunismo político les restan credibilidad ante los electores y, por tanto, no le ayudan a aproximarse seriamente al poder.

Sobre la novísima coalición de derechas, o de centro, derechas, que es como su fundador pretende que la llamen y que ha recompuerto, encabezado y rebautizado Fraga a toda prisa después del 14-D, con el sugestivo nombre de Partido Popular y con el renovado afán y propósito de derrotar electoralmente a los socialistas y de relevarlos en el poder, se puede decir que no gana ni pierde y que no es nueva sino vieja, pues es la misma Coalición Popular que fundó también Fraga y de la cual le obligaron a dimitir de su presidencia, después de haberla arruinado políticamente, en una socavada y desleal lucha en pos del poder personal, los mismos delfines políticos que ahora, nuevamente, le acompañan en su recién estrenada formación política.

Juan Fons Piñol Tivenys
(Tarragona)



EL SOCIALISTA

Fundado por Pablo Iglesias

Redactora-jefe: Angeles Puerta. Redacción: Ana Checa, Victoria R. Lira. Colaboran: M.ª Victoria Cansinos.

Confeción: María García, José Ángel Garcillán. Fotografía: Miguel Otero. Archivo y documentación: Esteban Pulgar. Administración: Herminio Alonso.

Redacción y Administración: Santa Engracia, 165. 28003 Madrid. Teléf. 234 87 40. Edita: «EL SOCIALISTA, S. A.». Imprime: Altamira, S.A.I.G.

Distribuye: Midesa, S. A., y Cezana, S. A. Depósito legal: M-845-1977. Tirada de este número: 240.000 ejemplares.

Nació en Colunga (Asturias) el 28 de junio de 1909. Doctor en Medicina, completó estudios en Alemania, Dinamarca, Suecia e Inglaterra. De 1935 a 1939 fue profesor de Fisiología en la Facultad de Medicina de Madrid. En 1950 gana la cátedra de Fisiología y Bioquímica de la Facultad de Medicina de Zaragoza. Se traslada a los Estados Unidos (en 1953) invitado por la Universidad de Minnesota, donde permanece hasta su jubilación, en 1975, como director del Jay Phillips Research Laboratory. Regresa a España en ese año. Invitado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, organizó la enseñanza y el laboratorio de Bioquímica de dicha Facultad, en la que continúa actualmente como profesor emérito. Ha obtenido numerosos premios y distinciones, entre los que citaremos la Gran Cruz de la Orden Civil de Sanidad y Gran Cruz de Alfonso el Sabio. Ha publicado cuatro libros en castellano y un sinfín de artículos en revistas especializadas.

No cree que sería muy conveniente recomendar tolerancia respecto al físico de los individuos? Me refiero a la marginación real que sufren hoy en día las personas gordas.

—Indudablemente sí, pero no sé qué puedo hacer yo para evitarlo. Mi interés se centra en las relaciones entre la nutrición y la salud humana. La presión que ejerce la moda de la delgadez, por encima de todo, supongo que es consecuencia de la ignorancia (por parte de mucha gente) del hecho de que el peso —y otras características físicas del cuerpo— muestra una distribución gaussiana. En épocas anteriores la gordura no era pecado ni estaba reñida con el concepto de belleza (basta ver las mujeres que pintó Rubens). Lo cierto es que una excesiva preocupación por la esbeltez podría considerarse como una obsesión.

—Usted mostró optimismo hacia las nuevas semillas para solucionar el problema del hambre en el mundo. ¿Qué es la revolución verde?

—Llamamos así al resultado de

FRANCISCO GRANDE COVIAN

«Nuestros descendientes dispondrán de una alimentación más variada»

la introducción por el doctor N. Borlaug de las semillas de cereales que producen plantas más pequeñas con mayor rendimiento de grano. Gracias a ellas y al empleo de los métodos de la agricultura moderna los países del sur de Asia han mejorado notablemente su producción de cereales. El doctor Borlaug trata ahora de introducir estos cultivos en África y ha obtenido algunos éxitos en Ghana y el Sudán.

—¿El metabolismo es un factor fijo o puede cambiar?

—Si por metabolismo entiende usted las necesidades de energía, deberá saber que lo que llamamos «necesidades de energía de mantenimiento» (o metabolismo basal) depende fundamentalmente del tamaño corporal. Está determinado por el número de células que constituyen nuestro organismo y por la proporción de las pertenecientes a órganos con distinta actividad metabólica. El cerebro, por ejemplo, que no pesa más de un dos por ciento del peso corporal, es responsable de un veinte por ciento del metabolismo basal. Se puede reducir disminuyendo el consumo alimenticio y causando una pérdida de peso. Gracias a ello y a la reserva de energía acumulada en forma de grasa, un sujeto normal puede resistir el ayuno absoluto (sin limitación de agua) unos sesenta días.

El otro factor determinante es la actividad física. Alguien que realiza un trabajo sedentario no necesita mucho más de dos mil quinientas kilocalorías diarias. En cambio, un desgaste físico intenso, como el de un deportista, precisa de tres mil a tres mil quinientas kilocalorías.

—¿Qué opina sobre la dieta macrobiótica?

—En su forma extrema la considero la más peligrosa de las dietas desequilibradas difundidas en la actualidad. Sus adversos resultados



están bien documentados en la literatura médica (vea usted la sección dedicada a esto en mi libro «Nutrición y salud»).

—¿No le parece significativo, socialmente hablando, el hecho de que la anorexia no se produzca en el sector masculino de la población?

—Así es.

—¿Se come mejor en España que en Norteamérica?

—Depende de usted. Hay alimentos americanos que son excelentes y disponen de un sistema (sumamente eficaz) de vigilancia de su calidad. Que le guste o no la manera en que los preparan es otra cuestión.

—¿Sí a los congelados y a las legumbres?

—Por supuesto, sin duda alguna. Lo he repetido cientos de veces.

—Los fármacos para quitar el apetito, ¿perjudican a la estabilidad psíquica?

—Algunos son peligrosos y han sido prohibidos en ciertos países.

—Hace poco publicó usted un artículo en memoria del doctor Francisco Jiménez García. ¿Quiere decir a los lectores algo de él?

—Ha fallecido recientemente, realizó una meritoria labor humanitaria y científica durante la guerra civil en Madrid. Fue una de las personas que más activamente contribuyó a aliviar los efectos del hambre, investigando también los efectos de la alimentación insuficiente sobre la salud de los madrileños. Por eso escribí que Madrid tiene una deuda con él.

—Su libro «Nutrición y salud» va por la décima edición, se ha hecho usted un médico muy popular. ¿Tiene consulta abierta?

—No, nunca la he tenido. Espero que mi obra sirva para extender el conocimiento de los principios científicos de la nutrición humana (cuyos fundamentos deberían enseñarse en la escuela).

—¿Cómo imagina un científico la nutrición en el año dos mil noventa?

—No será muy diferente de la actual en los países desarrollados. Nuestros descendientes dispondrán seguramente de una alimentación más variada y consumirán, cada vez más, productos sometidos a tratamientos industriales. Esto, que parece aterrar a muchos, tiene ventajas evidentes: permitirá una mejor utilización de los recursos alimenticios, hará posible un constante control de calidad, contribuirá a cambiar la dieta habitual y ayudará a quitarles un poco de trabajo a las amas de casa.

María Victoria Cansinos



EL SOCIALISTA
Revista de la izquierda

Portavoz del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
Santa Engracia, 165. 28003 Madrid
Del 1 al 15 de febrero